CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Presidente

Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué

Año III	Martes 22 de septiembre de 2026	Sesión 11 Anexo I

Mesa Directiva

Presidente

Dip. Raúl Bolaños-Cacho Cué

Vicepresidentes

Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas

Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz

Secretarios

Dip. Julieta Villalpando Riquelme

Dip. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra

Dip. Felipe Miguel Delgado Carrillo

Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos

Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel

Dip. Laura Irais Ballesteros Mancilla

Junta de Coordinación Política

Presidente

Dip. Ricardo Monreal Ávila
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios

Dip. José Elías Lixa Abimerhi
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Carlos Alberto Puente Salas
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Reginaldo Sandoval Flores
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidente Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año III	Ciudad de México, martes 22 de septiembre de 2026	Sesión 11 Anexo I

S U M A R I O

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO A DISCUSIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales. **5**

Mociones suspensivas recibidas:

Del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del PAN. **96**

Del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del PRI. **113**

Posicionamientos recibidos, en relación con el dictamen:

De la diputada Beatriz Milland Pérez, de Morena **118**

De la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del PRI. **120**

De la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN **121**

Del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Morena **123**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

Declaratoria de Publicidad.
Septiembre 9 de 2026.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

Con este propósito, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, procedimos al estudio de las iniciativas materia del presente dictamen, respecto de la cual se analizaron las diversas consideraciones que sirvieron de apoyo a la reforma que se propone, con objeto de emitir el presente dictamen.

Así, conforme a las facultades que confieren a esta Comisión de Puntos Constitucionales los artículos 71, fracción I, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 2, fracción XXXVI; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 81; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este órgano parlamentario el presente.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

DICTAMEN

El trámite, análisis y elaboración del dictamen que se presenta a consideración de las y los diputados de esta Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados ha observado lo siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de la elaboración del proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, llevó a cabo los trabajos correspondientes conforme a los siguientes apartados:

A. TRÁMITE LEGISLATIVO: se describen los pasos de gestión y procedimiento, para iniciar el proceso legislativo de las iniciativas que motivan el presente Dictamen.

B. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS: se exponen los objetivos, contenidos, motivos y alcances de las iniciativas turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

C. CONSIDERACIONES: se exponen los argumentos y razonamientos relacionados con las iniciativas y, con base en ello, se sustenta el sentido del presente Dictamen.

D. RESULTADO DEL DICTAMEN: se vierte la conclusión del dictamen con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

E. TEXTO CONSTITUCIONAL REFORMADO Y RÉGIMEN TRANSITORIO: se enuncia el Proyecto de Decreto, su texto normativo y régimen transitorio.

A. TRÁMITE LEGISLATIVO

A continuación, se describe el proceso legislativo de las iniciativas que motivan este Dictamen y se destacan los precedentes parlamentarios en la Cámara de Diputados, con los que se inició y continuó el proceso legislativo.

1. Mediante oficio CP2R1A.-3657, de fecha 31 de agosto de 2026, expediente 8919, la secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Senadora María Martina Kantún Can, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, presentada por la persona titular del Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue recibida por este órgano dictaminador el 31 de agosto de 2026, asignándosele el folio interno CPC-I-709-26.

2. Mediante oficio D.G.P.L.66-II-1-947, de fecha 10 de diciembre de 2025, expediente 4745, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de lenguaje incluyente, actualización de denominaciones relacionadas con la presidencia de la República y obligatoriedad de paridad e integración del gabinete presidencial, suscrita por el diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual fue recibida por este órgano dictaminador el 12 de enero de 2026, asignándole el folio interno CPC-I-380-25.

3. Mediante oficio D.G.P.L. 66-II-5-1734, de fecha 02 de septiembre de 2026, expediente 8989, el secretario de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad mexicana exclusiva, presentada por

la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual fue recibida por este órgano dictaminador el 03 de septiembre de 2026, asignándosele el folio interno CPC-I-712-26.

4. Mediante escrito, de fecha 2 de septiembre de 2026, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario PRI, remitió al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales una solicitud de información, la cual fue recibida por este órgano dictaminador el mismo día. En ella solicitó que se requiriera a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal información y documentación sobre la evidencia, los estudios técnicos y jurídicos, el análisis de proporcionalidad, la viabilidad de la renuncia a otras nacionalidades, el número estimado de personas afectadas, el mecanismo para verificar dicha renuncia y la justificación de la aplicación de la reforma a partir del proceso electoral de 2028. Asimismo, planteó veinte preguntas parlamentarias relacionadas con el diagnóstico y sustento de la iniciativa, su necesidad y proporcionalidad, su viabilidad jurídica e implementación, así como su impacto político y temporal.

B. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, **presentada por la persona titular del Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.**

A continuación, se aportan las premisas y argumentos esgrimidos por la persona titular del Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se enuncian, textualmente, a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objeto de la iniciativa

La nacionalidad expresa uno de los vínculos jurídicos y políticos fundamentales entre una persona y el Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento y protege el derecho de las mexicanas y los mexicanos a conservarla, aun cuando posean otra nacionalidad, en atención a la realidad de quienes, por razones familiares, migratorias o personales, mantienen vínculos legítimos con más de un país. Sin embargo, quien encabeza el Poder Ejecutivo Federal o estatal tiene una responsabilidad fundamental con el pueblo de México y con la Nación. La persona titular del Ejecutivo Federal o estatal recibe directamente del pueblo el mandato de gobernar por el bien de todas y todos, conduce la administración pública y ejerce atribuciones fundamentales para la vida política, institucional y, en el

ámbito federal, para la seguridad y las relaciones internacionales del Estado mexicano. Por la naturaleza de esa responsabilidad, su actuación debe responder de manera plena e inequívoca al interés del pueblo de México, por encima de cualquier otro vínculo o consideración, para garantizar que el interés y la soberanía nacionales sean los principios rectores que guíen su quehacer público. De manera similar, quien encabeza el Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tiene la profunda responsabilidad de anteponer los intereses del pueblo ante cualquier otra consideración.

La presente iniciativa tiene por objeto establecer expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder y ejercer los cargos de Presidenta o Presidente de la República, Gobernadora o Gobernador de una entidad federativa y Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que se renuncie a ella en los términos que establezca la ley antes del registro de la candidatura ante la autoridad electoral competente.

La iniciativa busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan, antes y durante el ejercicio del cargo, un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano. Para ello, establece una condición de elegibilidad específica, objetiva y verificable, justificada por la naturaleza de estas altas responsabilidades públicas. No se desconoce la nacionalidad mexicana de quienes posean otra nacionalidad ni se restringen sus derechos políticos con carácter general: quien aspire a alguno de estos cargos podrá hacerlo siempre que renuncie previamente a la nacionalidad extranjera en los términos previstos por la ley.

De esta manera, se armoniza el ejercicio de los derechos políticos con la exigencia reforzada de identidad, integridad y lealtad que corresponde a quienes reciben del pueblo la responsabilidad de encabezar un Poder Ejecutivo.

II. Marco constitucional vigente

El artículo 82, fracción I, de la CPEUM establece que, para ser Presidenta o Presidente de la República, se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos, hija o hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

En el mismo sentido, el artículo 116, fracción I, de la CPEUM dispone que solo podrá ser Gobernadora o Gobernador constitucional de un Estado quien sea ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad, o bien cuente con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

Por su parte, el artículo 122, apartado A, fracción III, remite a la Constitución Política de la Ciudad de México el establecimiento de los requisitos para ser Jefa o Jefe de Gobierno, ordenando que entre ellos figure el de ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos.

Como se observa, actualmente la CPEUM no exige, de manera expresa, la ausencia de una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal o de los ejecutivos locales.

Es cierto que el artículo 32 de la CPEUM dispone que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales la propia Constitución exija ser mexicano por nacimiento se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Sin embargo, la formulación vigente se refiere a la adquisición de

otra nacionalidad y no establece expresamente, para las titularidades de los poderes ejecutivos, la prohibición de tener o poseer una nacionalidad extranjera que haya sido atribuida desde el nacimiento. Esta redacción representa un vacío legal que ha dado lugar a interpretaciones imprecisas que han hecho nugatorio su contenido; tan es así, que la historia reciente de México registra casos de gobernantes que han accedido a la titularidad de los Poderes Ejecutivos teniendo doble nacionalidad.

Además, el sistema establecido en la Ley de Nacionalidad permite que las personas mexicanas por nacimiento a quienes otro Estado considere también como sus nacionales obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores un certificado de nacionalidad mexicana. Para ello, realizan ante las autoridades mexicanas una renuncia formal a la nacionalidad que les sea atribuida, a la sumisión, obediencia y fidelidad a Estados extranjeros y a la protección que pudiera corresponderles como extranjeras.

Este mecanismo ha permitido tener por satisfecho el requisito constitucional, sin que necesariamente se acredite que la persona dejó de ser nacional conforme al orden jurídico del Estado extranjero que le atribuyó dicha nacionalidad. Esa visión ha sido, además, reconocida por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Existe, por tanto, una brecha entre la finalidad constitucional de asegurar la ausencia de vínculos de lealtad con otros Estados para el desempeño de determinadas responsabilidades públicas y la manera en que actualmente puede acreditarse el cumplimiento de esa exigencia. La presente iniciativa busca cerrar esta brecha de manera clara, directa, sin ambigüedades y con pleno respeto a los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos.

III. Exigencia reforzada para las más altas responsabilidades públicas

La titularidad de un Poder Ejecutivo no constituye un cargo público ordinario. La Presidenta o el Presidente de la República representa la unidad del Estado mexicano y ejerce atribuciones directamente relacionadas con la conducción política de la Nación, la seguridad nacional, las relaciones internacionales y el funcionamiento de la Administración Pública Federal. Por su parte, las Gobernadoras y los Gobernadores, así como la Jefa o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ejercen responsabilidades equivalentes dentro de su ámbito constitucional y encabezan los poderes ejecutivos de las entidades que integran la Federación. La naturaleza de estos cargos justifica un régimen de elegibilidad particularmente estricto. Quien recibe del pueblo la responsabilidad de encabezar un Poder Ejecutivo debe responder exclusivamente a México y a sus instituciones.

La existencia de otra nacionalidad supone objetivamente la subsistencia de un vínculo jurídico y político con un Estado extranjero. Ese vínculo puede llevar aparejados derechos, deberes, posibilidades de participación política, protección diplomática y manifestaciones formales de pertenencia frente a otro Estado.

Ello no significa poner en duda la identidad, patriotismo o compromiso con México de las personas que poseen dos o más nacionalidades. La doble nacionalidad es una realidad legítima reconocida por nuestro orden constitucional. Sin embargo, la cuestión es distinta cuando una persona decide aspirar a encabezar el Poder Ejecutivo y asumir una responsabilidad directamente vinculada con la soberanía nacional.

En esos casos, el Estado puede exigir una definición inequívoca. Quien aspire a representar los intereses generales de la Nación o de una entidad federativa debe encontrarse libre de cualquier vínculo jurídico de nacionalidad con otro Estado.

La exigencia responde, por tanto, a la naturaleza del cargo y no a una valoración diferenciada de las personas. Se trata de asegurar que las decisiones de quienes ejercen las máximas responsabilidades ejecutivas tengan un solo referente de lealtad institucional: la CPEUM, las leyes y el bienestar del pueblo de México.

Esta finalidad es congruente con el sentido que históricamente ha tenido el artículo 32 constitucional. La protección de la soberanía y de la lealtad nacionales ha justificado que determinadas responsabilidades estratégicas se encuentren sujetas a requisitos de nacionalidad particularmente rigurosos.

III. Contenido de la iniciativa

Por las razones expuestas, se propone reformar la fracción 1 del artículo 82 constitucional para establecer expresamente que, además de los requisitos actualmente previstos para ser Presidenta o Presidente de la República, será necesario no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, que se renuncie a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, en los términos que establezca la ley.

La iniciativa no establece una prohibición absoluta para que una persona mexicana que actualmente posea otra nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de la República o a la Gubernatura de una entidad federativa. Por el contrario, preserva plenamente esa posibilidad siempre que, antes de su registro, haya renunciado efectivamente a la nacionalidad extranjera conforme al procedimiento que se establezca en la Ley de Nacionalidad.

De esta manera, la exigencia no descansa únicamente en una declaración formulada ante las autoridades mexicanas. La legislación secundaria deberá asegurar que la renuncia comprenda también las actuaciones necesarias frente

al Estado extranjero que atribuye esa nacionalidad, de forma que exista certeza sobre la exclusividad del vínculo jurídico exigido para ejercer el cargo.

Asimismo, se propone establecer expresamente que quien ejerza la Presidencia de la República no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. La iniciativa precisa además algunas conductas incompatibles con esta obligación, entre ellas el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogimiento a su protección diplomática.

Estas previsiones son necesarias para que el requisito constitucional no opere exclusivamente al momento de la elección, sino que se mantenga durante todo el ejercicio de la función. La lealtad exclusiva que se exige para acceder al cargo debe conservarse mientras subsista la responsabilidad pública.

Por esa razón, su incumplimiento quedará sujeto al régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto de la CPEUM.

Bajo la misma lógica, se propone reformar el artículo 116 para incorporar este requisito respecto de las gobernadoras y los gobernadores de los estados, así como el artículo 122 para establecer directamente desde la CPEUM el requisito correspondiente para quien aspire a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con ello se establece una regla nacional que aplicará de igual forma para quienes encabezan los poderes ejecutivos en el país, y evitar así que en las entidades federativas se pueda dar un tratamiento distinto entre nacionalidad y la soberanía nacional para acceder a esto cargos públicos.

IV. Igualdad y derechos políticos

La iniciativa que se presenta parte del respeto irrestricto a la dignidad humana y a la igualdad entre las mexicanas y los mexicanos. No desconoce la nacionalidad mexicana de quienes posean simultáneamente otra nacionalidad, ni restringe con carácter general sus derechos políticos. Tampoco impide que puedan participar en la vida democrática o aspirar a cargos públicos en los términos establecidos por la CPEUM. Establece únicamente una condición específica para tres responsabilidades ejecutivas de la más alta relevancia constitucional.

Toda persona mexicana por nacimiento que reúna los demás requisitos podrá aspirar a ellas. Cuando posea además otra nacionalidad, podrá hacerlo igualmente siempre que decida libremente renunciar a esta en los términos previstos por la ley.

La diferencia, por tanto, no se funda en el origen de la persona, sino en una condición objetiva vinculada con la naturaleza del cargo y en la necesidad de asegurar la exclusividad del vínculo jurídico y político de quien ejercerá el Poder Ejecutivo.

La democracia exige derechos, pero también responsabilidades. Quienes reciben del pueblo la más alta encomienda de gobierno deben asumir frente a él un compromiso pleno, inequívoco y exclusivo.

Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer una regla sencilla: quien encabece un Poder Ejecutivo en México debe tener una sola nacionalidad, la mexicana, y durante el ejercicio de su encargo debe conducirse únicamente como nacional de nuestro país.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

En última instancia, se trata de brindar certeza jurídica, preservar la integridad de nuestras instituciones y reafirmar que el ejercicio de las más altas responsabilidades públicas tiene como único horizonte la defensa de la soberanía nacional, el interés público, la justicia social y el bienestar del pueblo de México.

A fin de dar mayor referencia a la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:

DICE	***DEBE DECIR***
Artículo 82. *Para ser Presidente se requiere:*	***Artículo 82.*** *Para ser Presidente* ***o Presidenta*** *se requiere:*
I. *Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.*	***I.*** *Ser ciudadano* ***o ciudadana*** *mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo* ***o hija*** *de padre o madre mexicanos;* ***no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley****, y haber residido en el país al menos durante veinte años.*
Sin correlativo	***Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.***

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

Sin correlativo	*Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.*
II. a VIII. ...	*II. a VIII. ...*
Artículo 116. ...	*Artículo 116. ...*
...	...
I. ...	*I. ...*
...	...
...	...
...	...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento ~~y nativo de él~~, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.	*Sólo podrá ser gobernador o* ***gobernadora*** *constitucional de un Estado un ciudadano o* ***ciudadana*** *mexicana por nacimiento que* ***no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, así como ser nativo o nativa de dicho Estado,*** *o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.*
	Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de las constituciones de las entidades federativas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

II. a X. ...	***II. a X. ...***
Artículo 122. ...	***Artículo 122. ...***
A. ...	***A. ...***
I. y II. ...	***I. y II. ...***
III. ...	***III. ...***
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.	*La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe* ***o Jefa*** *de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.* ***En todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.***

	Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de la Constitución Política de la Ciudad de México.
...	...
IV. a XI. ...	***IV. a XI. ...***
B. a D. ...	***B. a D. ...***

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de lenguaje incluyente, actualización de denominaciones relacionadas con la presidencia de la República y obligatoriedad de paridad e integración del gabinete presidencial, suscrita por el **diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.**

Por lo que corresponde a esta iniciativa, se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar lenguaje incluyente en la Carta Magna, entre las que destaca la propuesta para reformar el primer párrafo del artículo 82, y su fracción primera, con el fin de modificar la denominación de "Presidente" a "Presidenta o Presidente"; la de "ciudadano mexicano" a "ciudadana mexicana o ciudadano mexicano"; la de "hijo" a "hija o hijo"; y la de padre "mexicano" a "padre mexicano o madre mexicana".

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad mexicana exclusiva, presentada por la **diputada María del Rosario Orozco Caballero.**

Por lo que respecta a esta iniciativa, se propone reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer el requisito de contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para solicitar el registro de una candidatura y ejercer la titularidad de la Presidencia de la República, la gubernatura de un Estado o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, se establece que quien posea otra nacionalidad deberá acreditar, previamente a la solicitud de registro de su candidatura, haber renunciado a ella; que dicha condición deberá conservarse durante todo el ejercicio del cargo, y que sus titulares no podrán solicitar, adquirir o recuperar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras los derechos derivados de ésta.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

C. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión está legitimada para conocer y atender la presente iniciativa de Reforma Constitucional, en términos de lo que disponen los artículos 70, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Esta Comisión de Puntos Constitucionales está facultada para conocer y resolver el contenido de estas iniciativas de reforma constitucional, habida cuenta de lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que disponen los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 81; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

TERCERA. PLANTEAMIENTO, OBJETO Y FINALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Esta Comisión Dictaminadora advierte que la iniciativa presentada por la persona titular del Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer expresamente que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de

poseerla, deberán renunciar a ella previamente a solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley.

La propuesta parte del reconocimiento de que la Constitución protege la nacionalidad mexicana por nacimiento aun cuando una persona posea simultáneamente otra nacionalidad. No obstante, la iniciativa considera que la naturaleza de las titularidades de los poderes ejecutivos justifica una exigencia particular, pues quienes las ejerzan deben mantener, antes y durante el encargo, **"un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano"**. En ese sentido, plantea una **"condición de elegibilidad específica, objetiva y verificable"**, vinculada con las responsabilidades propias de dichos cargos.

En cuanto al problema que pretende atender, la iniciativa señala que el segundo párrafo del artículo 32 constitucional reserva determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento que "no adquieran otra nacionalidad"; sin embargo, estima que dicha formulación no contempla expresamente a quienes poseen una nacionalidad extranjera atribuida desde el nacimiento. Por ello, sostiene que esta redacción **"representa un vacío legal que ha dado lugar a interpretaciones imprecisas"** y propone incorporar expresamente el requisito de "no tener ni adquirir otra nacionalidad".[3] Asimismo, busca superar la diferencia que puede existir entre la renuncia formulada ante autoridades mexicanas y la subsistencia de la nacionalidad conforme al orden jurídico del Estado extranjero, de manera que exista certeza respecto de la exclusividad del vínculo jurídico exigido para ejercer el cargo.

La reforma no se limita al momento de registro. Durante el ejercicio del cargo, la persona titular no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana; asimismo, se

consideran incompatibles con esta obligación el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogimiento a su protección diplomática. El incumplimiento se remite al régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto constitucional.

Ahora bien, esta Comisión estima relevante precisar desde el planteamiento inicial el alcance limitado de la propuesta. Como expresamente reconoce la Exposición de Motivos, ésta "no desconoce la nacionalidad mexicana de quienes posean otra nacionalidad ni se restringen sus derechos políticos con carácter general". Una persona mexicana por nacimiento que posea otra nacionalidad podrá continuar participando en la vida pública y aspirar a cargos en los términos constitucionales correspondientes; tratándose exclusivamente de las titularidades comprendidas en la reforma, esto es, presidencia de la República, gubernaturas de las entidades federativas y de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podrá aspirar a ellas si previamente renuncia a la nacionalidad extranjera conforme al procedimiento legal aplicable.

De esta manera, la finalidad planteada consiste en establecer una regla constitucional especial para el acceso y permanencia en las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales, orientada a asegurar que quienes las desempeñen mantengan exclusivamente el vínculo jurídico-político mexicano durante su ejercicio. Para hacer operativa esta exigencia, el régimen transitorio ordena al Congreso de la Unión adecuar, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

En el mismo sentido, el transitorio quinto de la propuesta de reforma establece que "los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto conservarán su validez y surtirán plenos efectos respecto de los cargos y funciones distintos de los señalados en los artículos 82, 116, fracción I, y 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Asimismo, el transitorio sexto, propone la armonización de las constituciones de las entidades federativas y su legislación electoral con lo dispuesto en el decreto, dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor. En tanto que lo dispuesto en el presente decreto será de aplicación directa.

CUARTA. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

1) Marco Conceptual: Nacionalidad, Ciudadanía y Doble Nacionalidad en México

Esta Comisión Dictaminadora considera necesario distinguir entre nacionalidad, ciudadanía y doble nacionalidad, porque la Constitución les atribuye contenidos y efectos jurídicos diferentes. Esta precisión permite comprender el alcance de las expresiones empleadas por la iniciativa: tener, adquirir, renunciar e invocar otra nacionalidad.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

La nacionalidad es el vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado y del cual derivan derechos, obligaciones y mecanismos de protección.[1] Conforme al artículo 30 constitucional, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.[2] Se trata, por tanto, de una condición jurídica de pertenencia que no depende del lugar donde reside la persona ni del ejercicio constante de los derechos que produce.

La ciudadanía es una condición distinta. El artículo 34 constitucional establece que sólo pueden ser ciudadanos quienes previamente tengan la calidad de mexicanos y cumplan los requisitos de edad y modo honesto de vivir. A su vez, el artículo 35 vincula la ciudadanía con derechos como votar, ser votada o votado y acceder al servicio público.[3] En consecuencia, la nacionalidad determina la pertenencia jurídica al Estado, mientras que la ciudadanía se relaciona principalmente con la participación política.

Esta diferencia se confirma en los artículos 37 y 38 constitucionales, que regulan separadamente la pérdida de la nacionalidad, la pérdida de la ciudadanía y la suspensión de los derechos ciudadanos.

La doble nacionalidad se presenta cuando dos Estados reconocen simultáneamente a una persona como su nacional. Puede existir desde el nacimiento, por la concurrencia de criterios territoriales o de filiación, o surgir posteriormente mediante

---

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización*, Opinión Consultiva OC-4/84, 19 de enero de 1984, párr. 35.https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[3] Ibidem; artículos 34 y 35

la naturalización. La Suprema Corte ha señalado que esta condición supone mantener un vínculo jurídico-político con dos Estados.[4]

También debe distinguirse entre tener una nacionalidad y ejercer los derechos derivados de ella. Tenerla significa que un Estado reconoce jurídicamente a la persona como su nacional; ejercer sus efectos comprende conductas concretas, como utilizar un pasaporte, votar o solicitar protección diplomática. Invocarla, por su parte, significa hacerla valer ante una autoridad extranjera. La Ley de Nacionalidad reconoce estas diferencias al regular separadamente la posesión o adquisición de otra nacionalidad, la actuación como nacional mexicano y la invocación de protección extranjera.[5]

Dentro de la iniciativa, la expresión "no tener ni adquirir otra nacionalidad" comprende tanto la nacionalidad que la persona ya posee como aquella que pudiera obtener posteriormente. Esta distinción no es meramente terminológica: la propuesta no se limita a impedir ciertas conductas, como votar en otro país, utilizar un pasaporte extranjero o solicitar protección diplomática, sino que establece un requisito relacionado con la existencia misma de otro vínculo de nacionalidad.

En consecuencia, el requisito propuesto debe entenderse a partir de la existencia del vínculo jurídico con otro Estado y no solamente de la conducta de la persona frente a éste. Si ese vínculo continúa vigente, la abstención de ejercer derechos

---

[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, *Amparo Directo en Revisión 69/2024*, párrs. 139 a 141. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2024/10/2_326346_6919_firmado.pdf

[5] Ley de Nacionalidad, artículos 12 a 14. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Nacionalidad.pdf

políticos o de utilizar documentos extranjeros no basta, por sí misma, para considerar cumplida la exigencia constitucional.

2) Antecedentes y sentido de la reforma constitucional de 1997 en materia de doble nacionalidad

Durante la década de 1990, el fenómeno migratorio mexicano adquirió una importancia creciente en la agenda nacional, particularmente por la situación jurídica de las personas mexicanas que residían en el extranjero.[6] En diversos casos, para acceder plenamente a los derechos reconocidos a los nacionales del país de residencia era necesario adquirir su nacionalidad; sin embargo, la legislación mexicana entonces vigente establecía que dicha adquisición podía ocasionar la pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento. Esta situación generaba una disyuntiva entre integrarse plenamente a la sociedad de residencia y conservar el vínculo jurídico con México, aun cuando las comunidades migrantes mantenían importantes vínculos familiares, culturales y sociales con el país.

Ante esta problemática, comenzó a plantearse la necesidad de modificar el régimen constitucional para permitir que las personas mexicanas por nacimiento pudieran adquirir otra nacionalidad sin perder la mexicana. Este proceso no fue exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que involucró al Poder Legislativo, especialistas, organizaciones y representantes de comunidades mexicanas en el extranjero. En este contexto, el 4 de abril de 1995 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Plural de Análisis en Materia de Nacionalidad, encargada de

[6] *Medición directa e indirecta de la migración mexicana hacia Estados Unidos 1990-1995.* (1a. C.). CONAPO. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de https://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/04.pdf

realizar estudios y consultas sobre la viabilidad de establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana y, en su caso, formular las propuestas constitucionales y legales correspondientes.

Los trabajos de dicha Comisión estuvieron acompañados de diversos coloquios, foros y consultas realizados durante 1995 y 1996, entre ellos el Coloquio sobre la Doble Nacionalidad de junio de 1995 y encuentros celebrados en entidades con importantes niveles de migración.[7] Estos ejercicios permitieron conocer directamente las condiciones de las comunidades mexicanas en el extranjero y evidenciaron una problemática común: la disyuntiva entre conservar la nacionalidad mexicana y acceder plenamente a los derechos derivados de la nacionalidad del Estado receptor. En términos generales, los participantes coincidieron en la conveniencia de establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana, particularmente para favorecer el ejercicio de derechos civiles y políticos en los países de residencia.

Como resultado de este proceso, el Ejecutivo Federal presentó el 20 de noviembre de 1996 una iniciativa ante la Cámara de Senadores cuyo planteamiento central consistía en establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, aun cuando se adquiriera otra nacionalidad o ciudadanía. La propuesta buscaba que las personas mexicanas residentes en el extranjero pudieran integrarse en mejores condiciones a las sociedades donde residían sin romper jurídicamente su vínculo con México. Al mismo tiempo, la iniciativa reconoció que la adquisición de

[7] La no pérdida de la nacionalidad mexicana: Memoria de los foros de análisis en materia de nacionalidad / Foros de análisis en materia. . . (1995). Bibliotecas de la H. Cámara de Diputados. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de https://bibliotecas.diputados.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54611&query_desc=su%3A%22CIUDADANIA%20DOBLE%22

otra nacionalidad no necesariamente implicaba el abandono de la identidad, cultura o vínculos con el país de origen.[8]

No obstante, la reforma no pretendió eliminar todas las consecuencias jurídicas derivadas de la doble nacionalidad. Durante la discusión legislativa se incorporaron mecanismos destinados a prevenir posibles conflictos derivados de la coexistencia de vínculos jurídicos con otros Estados, particularmente respecto de determinados cargos y funciones relacionados con intereses esenciales del Estado.[9] El Senado aprobó la iniciativa el 5 de diciembre de 1996, introduciendo modificaciones a los artículos 32 y 37 y al segundo transitorio[10], mientras que la Cámara de Diputados aprobó posteriormente el proyecto en sesión del 10 de diciembre de 1996 para continuar con el procedimiento de reforma constitucional.[11]

De esta manera, el Constituyente Permanente adoptó un modelo basado en dos elementos: por una parte, la regla general de conservación de la nacionalidad mexicana por nacimiento y, por otra, la posibilidad de establecer restricciones objetivas para determinados cargos y funciones cuando resultara necesario

---

[8] Del Sistema de Información Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Cámara de Diputados, D. (s. f.-c). *Diario de los Debates, LVI Legislatura, sesión no. 39, primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio*. Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. https://cronica.diputados.gob.mx/Debates/56/3er/Ord1/19961209-I.html

[9] Del Sistema de Información Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Cámara de Diputados, D. (s. f.-e). Diario de los Debates, LVI Legislatura, sesión no. 40, primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio. Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. https://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/56/3er/Ord1/19961210.html

[10] Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados. (5 de diciembre, 1996). https://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/56/201.html

[11] Del Sistema de Información Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Cámara de Diputados, D. (10 de diciembre, 1996). *Diario de los Debates, LVI Legislatura, sesión no. 40, primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio*. Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. https://cronica.diputados.gob.mx/Debates/56/3er/Ord1/19961210.html

proteger intereses vinculados con la soberanía, seguridad, representación nacional o identidad del Estado. En particular, el artículo 37, apartado A, de la Constitución federal estableció que ningún mexicano por nacimiento podría ser privado de su nacionalidad, con lo que la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera dejó de producir, por sí misma, la pérdida de la nacionalidad mexicana.

Asimismo, el artículo 32 constitucional reconoció expresamente la posibilidad de que una persona mexicana tuviera otra nacionalidad y dispuso que la ley regularía el ejercicio de determinados derechos y establecería normas para evitar conflictos derivados de la doble nacionalidad. En este sentido, la reforma reconoció la doble nacionalidad como una situación jurídica legítima, pero no consideró que sus efectos fueran irrelevantes en todos los ámbitos. Por ello, se estableció una reserva para determinados cargos y funciones que requirieran ser mexicano por nacimiento y para los cuales no se hubiera adquirido otra nacionalidad.

Esta diferenciación estuvo relacionada, particularmente, con funciones vinculadas con la soberanía, seguridad y defensa nacional. En los debates legislativos se expresó la preocupación de que quienes desempeñaran determinadas funciones pudieran mantener vínculos jurídicos concurrentes con otros Estados. Sin embargo, resulta importante distinguir entre la existencia objetiva de un vínculo jurídico con otro Estado, derivado de la nacionalidad, y la lealtad o convicción personal de una persona respecto de México. La reforma de 1997 no estableció que la doble nacionalidad equivaliera a una falta de patriotismo; en cambio, utilizó la adquisición de otra nacionalidad como un criterio jurídico objetivo para establecer determinadas restricciones respecto de funciones específicas.

Por tanto, las objeciones relacionadas con la identidad nacional, la doble lealtad y la soberanía no condujeron a prohibir la doble nacionalidad. El Constituyente optó por una solución de equilibrio: permitirla como regla general y establecer mecanismos específicos para atender los posibles conflictos que pudieran presentarse en determinadas funciones estatales. Esta lógica ha sido posteriormente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[12] al vincular las restricciones con cargos relacionados con los intereses o destino político de la Nación, áreas estratégicas o prioritarias, así como con la seguridad y defensa nacional.

Finalmente, después de la aprobación por ambas Cámaras, el proyecto fue remitido a las legislaturas estatales conforme al artículo 135 constitucional. El 5 de marzo de 1997 se realizó la declaratoria correspondiente, una vez constatada la aprobación de 26 congresos locales, y se declararon reformados los artículos 30, 32 y 37 constitucionales. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997[13] y entró en vigor, como regla general, el 20 de marzo de 1998. Posteriormente, la Ley de Nacionalidad, publicada el 23 de enero de 1998, desarrolló las disposiciones constitucionales y estableció mecanismos como el Certificado de Nacionalidad Mexicana para regular determinadas situaciones de personas mexicanas por nacimiento que fueran consideradas nacionales de otro Estado.

---

[12] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 87/2018, sentencia de 7 de enero de 2020, apartado quinto, pp. 25-27, especialmente p. 26. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5617045

[13] *DOF - Visor de imágenes*. (s. f.). https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4872274&fecha=20/03/1997&cod_diario=209070

Dicha reforma constitucional constituyó un cambio sustantivo en el régimen jurídico de la nacionalidad mexicana. Su propósito principal fue establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, aun cuando una persona adquiriera voluntariamente otra nacionalidad o ciudadanía.

Sin embargo, la reforma no puede entenderse únicamente como el reconocimiento de la posibilidad de ostentar una doble nacionalidad. Desde su origen, el Constituyente Permanente procuró conciliar dos objetivos: por una parte, proteger el vínculo jurídico y cultural de las personas mexicanas residentes en el extranjero con México y, por otra, establecer salvaguardas frente a los posibles conflictos jurídicos, políticos y de lealtad que pudieran derivarse de la existencia de vínculos con otro Estado.

3) Diagnóstico de las reglas actuales y por qué resultan insuficientes

Esta Comisión Dictaminadora considera que el régimen vigente debe analizarse distinguiendo entre su validez conforme al parámetro constitucional actual y su suficiencia frente al requisito más exigente que propone la iniciativa. Las normas actuales reconocen la doble nacionalidad, regulan sus efectos y establecen un mecanismo para acceder a cargos reservados a personas mexicanas por nacimiento. La cuestión consiste en determinar si ese mecanismo permite comprobar que ha desaparecido, conforme al derecho extranjero, cualquier otra nacionalidad.

3.1. Contenido y alcance del artículo 32 constitucional

El artículo 32 constitucional contiene dos reglas. La primera reconoce que existen personas mexicanas que poseen otra nacionalidad y encomienda a la ley regular sus derechos y prevenir los conflictos derivados de esa situación. La segunda reserva los cargos para los cuales la Constitución exige ser mexicana o mexicano por nacimiento a quienes tengan esa calidad y "no adquieran otra nacionalidad".[14]

La Constitución, por tanto, no prohíbe de manera general la doble nacionalidad. Establece una restricción especial para determinados cargos públicos y permite que la ley regule su acreditación. En consecuencia, no existe propiamente un vacío normativo, sino un régimen cuya suficiencia debe examinarse frente al objetivo específico de la reforma.

3.2. Alcance de la expresión "no adquieran otra nacionalidad"

El artículo 32 se refiere, por una parte, a quienes "posean otra nacionalidad" y, por otra, a quienes "no adquieran otra nacionalidad". Esta diferencia es relevante porque una persona puede ser considerada nacional de otro Estado desde su nacimiento, sin haber realizado posteriormente un acto voluntario para obtener esa calidad.

Sin embargo, tampoco sería preciso afirmar que "adquirir" se refiere exclusivamente a una nacionalidad obtenida después del nacimiento, pues el artículo 30 constitucional dispone que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.[1] La cuestión radica en que el texto vigente no establece

[14] Op. Cit. CPEUM. Artículo 32

inequívocamente el requisito de no tener otra nacionalidad. Por ello, la fórmula propuesta por la iniciativa presidencial de "no tener ni adquirir otra nacionalidad", amplía expresamente el parámetro para comprender tanto la nacionalidad atribuida desde el nacimiento como la obtenida posteriormente.

Como se argumenta en la iniciativa presidencial, la formulación vigente de los requisitos solicitados a quienes aspiren a la presidencia de la República, a las gubernaturas de las entidades federativas o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, **se refiere solamente a la "adquisición" de otra nacionalidad, pero no establece claramente la prohibición de "tener" o "poseer" una nacionalidad extranjera que haya sido atribuida desde el nacimiento.**

3.3. Requisitos vigentes para acceder a la titularidad de los poderes ejecutivos federal, locales y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México

El artículo 82, fracción I, exige ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar la Presidencia de la República, mientras que el artículo 116, fracción I, establece esa misma calidad para las titularidades de las gubernaturas. En ambos casos resulta aplicable la reserva general del artículo 32 constitucional.[15]

La regulación de la Jefatura de Gobierno es distinta. El artículo 122, apartado A, fracción III, remite a la Constitución Política de la Ciudad de México la determinación de los requisitos respectivos, sin establecer actualmente la calidad de persona

[15] Op. Cit. CPEUM. Artículo 82

mexicana por nacimiento ni la exclusividad de nacionalidad.[16] La iniciativa propone, por tanto, fijar directamente en la Constitución federal un parámetro común para las tres titularidades ejecutivas.

3.4. Reglas para prevenir conflictos de doble nacionalidad

La Ley de Nacionalidad contiene diversas reglas para administrar los efectos de la doble nacionalidad. Entre ellas, obliga a las personas mexicanas por nacimiento a ingresar y salir del país como nacionales; determina los actos respecto de los cuales deben actuar como mexicanas; limita la posibilidad de invocar la protección de otro gobierno y establece una presunción de adquisición de nacionalidad extranjera cuando se realicen actos para obtenerla o conservarla o cuando la persona se ostente como extranjera.[17]

Además, el artículo 16 exige presentar el Certificado de Nacionalidad Mexicana para acceder a cargos reservados y dispone el cese inmediato cuando durante su ejercicio se adquiera otra nacionalidad. Estas reglas previenen conflictos dentro del orden jurídico mexicano, pero no determinan por sí mismas si la nacionalidad extranjera dejó de existir.

[16] Op. Cit. CPEUM. Artículo 122
[17] Op. Cit. "Ley de Nacionalidad".

3.5. Naturaleza y alcance del Certificado de Nacionalidad Mexicana

La Ley de Nacionalidad define este Certificado como el instrumento mediante el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad. Se trata de un documento probatorio expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de la propia ley.[5]

Para obtenerlo, la persona debe renunciar expresamente a la nacionalidad que otro Estado le atribuya; a toda sumisión, obediencia y fidelidad a ese Estado; a su protección, y a los derechos que los tratados concedan a los extranjeros. También debe protestar adhesión a las leyes y autoridades mexicanas. El Reglamento exige que estas manifestaciones se formulen por escrito, pero no requiere una resolución del Estado extranjero que acredite la pérdida de su nacionalidad.[6]

Por ello, el Certificado acredita el cumplimiento del procedimiento establecido por el derecho mexicano, pero no necesariamente que la nacionalidad haya quedado extinguida conforme al ordenamiento extranjero.

3.6. Renuncia ante México y pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera

La nacionalidad es una condición atribuida y regulada por cada Estado, dentro de los límites del derecho internacional. En consecuencia, las autoridades mexicanas pueden determinar los efectos que una declaración de renuncia produce en México, pero no pueden modificar unilateralmente la legislación ni las decisiones de otro Estado.

Por tanto, debe distinguirse entre la renuncia formulada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el procedimiento que, en su caso, deba realizarse ante el Estado extranjero para que la nacionalidad deje efectivamente de existir. El Certificado vigente acredita la primera, pero por sí solo no demuestra necesariamente la conclusión del segundo.

3.7. Insuficiencia del mecanismo actual

El Certificado de Nacionalidad Mexicana no es inválido ni insuficiente conforme al régimen vigente: constituye el documento legalmente establecido para acreditar el requisito previsto en la Ley de Nacionalidad. Su limitación surge cuando se pretende utilizarlo para demostrar un hecho distinto: que otro Estado ha dejado de reconocer a la persona como su nacional.

Si el nuevo requisito constitucional consiste en no tener otra nacionalidad, ya no bastará con acreditar una declaración de renuncia formulada ante México. Será necesario comprobar que el vínculo extranjero dejó de subsistir conforme a la legislación que lo atribuyó. En ese supuesto, el mecanismo vigente no ofrece por sí solo certeza sobre el hecho jurídicamente relevante.

En consecuencia, la reforma no se limita a precisar el lenguaje del artículo 32 ni a sustituir una formalidad por otra. Modifica el estándar sustantivo de elegibilidad: de una renuncia declarada y certificada conforme al derecho mexicano se transita hacia la exigencia de que no subsista otra nacionalidad. Por ello, la legislación secundaria deberá establecer un mecanismo de verificación congruente con ese nuevo requisito, esto es, la renuncia deberá contemplar las actuaciones necesarias frente

al Estado extranjero que atribuye esa nacionalidad, pues no sería jurídicamente consistente exigir la extinción efectiva de la nacionalidad extranjera y continuar acreditándola exclusivamente mediante un documento que no fue diseñado para probar ese resultado.

4) Procedimientos de renuncia a la nacionalidad extranjera y sus consecuencias jurídicas en el derecho comparado

Esta Comisión Dictaminadora considera necesario examinar la forma en que distintos Estados regulan la pérdida voluntaria de su nacionalidad, pues la iniciativa exige que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan otra nacionalidad y, en caso de poseerla, renuncien a ella antes de solicitar su registro a determinada candidatura.

El análisis se concentra en Estados Unidos y España, por ser destinos relevantes de la emigración mexicana, así como en Francia, cuya legislación incorpora un procedimiento distinto.[18] No se estudian los requisitos para ocupar cargos públicos en esos países, sino la manera en que se extingue jurídicamente una nacionalidad extranjera, el momento en que la pérdida produce efectos y el documento mediante el cual puede acreditarse.

[18] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (consultado el 01-09-2026). *Migración.* Cuéntame de México. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/migracion/

La nacionalidad constituye un vínculo jurídico regulado soberanamente por cada Estado. Por ello, una declaración formulada ante autoridades mexicanas, la entrega de un pasaporte extranjero o la expedición de un Certificado de Nacionalidad Mexicana no extinguen, por sí mismas, una nacionalidad reconocida por otro país. Para que la renuncia produzca efectos deben cumplirse las condiciones previstas por la legislación extranjera y existir una resolución, certificado, inscripción o acto definitivo de su autoridad competente.

En Estados Unidos, la renuncia debe realizarse personalmente ante una autoridad diplomática o consular estadounidense en el extranjero. El Departamento de Estado exige que la persona conozca las consecuencias de su decisión, asista a las entrevistas correspondientes, complete los formularios y preste personalmente el juramento de renuncia a su nacionalidad. La determinación administrativa se acredita mediante el *Certificate of Loss of Nationality* o Certificado de Pérdida de Nacionalidad —CLN—. Por lo que, mientras éste no haya sido expedido, la autoridad mexicana no contaría con un documento definitivo que demostrara la terminación del vínculo.[19]

Formalizada la pérdida de la nacionalidad, la persona deja de contar con pasaporte estadounidense, derechos políticos, protección diplomática y el derecho automático a ingresar o residir en Estados Unidos. La decisión es esencialmente irreversible y no extingue obligaciones penales, financieras o fiscales anteriores. Además,

[19] U.S. Department of State. (consultado el 01-09-2026). *Relinquishing U.S. nationality abroad.* Bureau of Consular Affairs. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Relinquishing-US-Nationality-Abroad.html

quienes sean considerados *covered expatriates*[20] pueden quedar sujetos al régimen tributario de la sección 877A y a la presentación del formulario 8854.[21]

En España, el artículo 24.2 del Código Civil establece que las personas emancipadas pueden renunciar expresamente a la nacionalidad si poseen otra y residen habitualmente en el extranjero. Tratándose de quienes también son mexicanas, la adquisición o utilización de la nacionalidad mexicana no produce automáticamente la pérdida de la española, por lo que se requiere una renuncia expresa. Ésta puede formularse ante el Registro Civil, notario o funcionario diplomático o consular. Aunque la inscripción de la pérdida tiene carácter declarativo, constituye el medio idóneo para documentarla y acreditarla.[22]

Francia admite la pérdida mediante declaración cuando la persona mayor de edad adquirió voluntariamente otra nacionalidad y reside en el extranjero. Si no reúne estas condiciones, puede solicitar al Gobierno francés autorización para perderla mediante el procedimiento de liberación de los vínculos de lealtad. En este último supuesto, la pérdida se formaliza por decreto y produce efectos desde su expedición. Este régimen demuestra que la voluntad de renunciar puede no ser

---

[20] Esta figura se refiere a un estatus fiscal para designar a ciertos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes a largo plazo que, al renunciar a la ciudadanía o estatus de residencia, cumplan con criterios financieros específicos que los obligan a pagar un impuesto de salida (*exit tax*).

[21] U.S. Department of State. (consultado el 01-09-26). *Relinquishing U.S. nationality abroad.* https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Relinquishing-US-Nationality-Abroad.html

Internal Revenue Service. (2026). *Expatriation tax*. https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax

Internal Revenue Service. (2026). *Instructions for Form 8854.* https://www.irs.gov/instructions/i8854

[22] Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (1889). *Gaceta de Madrid*, núm. 206, art. 24. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

suficiente, pues la terminación del vínculo depende de la aprobación de una autoridad extranjera.[23]

Los regímenes examinados muestran que no existe un procedimiento universal. Estados Unidos utiliza un certificado de pérdida; España exige una declaración expresa cuya inscripción permite acreditarla; y Francia contempla tanto declaraciones registradas como autorizaciones formalizadas mediante decreto. También varían las autoridades competentes, los tiempos de tramitación y el momento en que la pérdida produce efectos.

Estas diferencias inciden directamente en la aplicación de la iniciativa, porque la conclusión del procedimiento dependerá de autoridades extranjeras cuyos tiempos no controla el Estado mexicano. Por ello, una solicitud, una cita consular o una declaración pendiente de resolución no pueden considerarse suficientes. Antes del registro de la candidatura, la pérdida debe haber producido plenamente sus efectos conforme al ordenamiento extranjero y encontrarse acreditada mediante un documento definitivo.

La legislación secundaria deberá precisar los documentos admisibles, las reglas de traducción, apostilla o legalización y los mecanismos para verificar su autenticidad, con el auxilio técnico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta manera, el requisito constitucional no descansará en una simple manifestación de voluntad, sino en la comprobación objetiva de que la persona dejó jurídicamente de ser considerada nacional por el otro Estado. Con ello, la reforma evitará simulaciones y

[23] République Française. (2025, 28 de mayo). *Perte volontaire de la nationalité française*. Service-Public.fr. https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3073

garantizará certeza, sin atribuir a México la facultad de extinguir unilateralmente una nacionalidad extranjera.

5) Análisis jurisprudencial del régimen vigente y necesidad de una regla constitucional expresa

Esta Comisión Dictaminadora considera que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permiten identificar con claridad el estándar aplicable bajo el régimen vigente: la restricción prevista en el artículo 32 constitucional no constituye un impedimento absoluto para las personas mexicanas por nacimiento a quienes otro Estado también reconoce como sus nacionales, pues actualmente pueden cumplir el requisito mediante la presentación del Certificado de Nacionalidad Mexicana. No existe, por tanto, una contradicción jurisprudencial sobre el medio de acreditación exigible, sino una interpretación construida a partir del texto constitucional y legal vigente, cuyo alcance resulta necesario revisar frente a la finalidad de la iniciativa.

El criterio de la Suprema Corte directamente aplicable es la tesis aislada P. III/2013 (9a.), de rubro "Nacionalidad mexicana por nacimiento. La prohibición de adquirir una diversa, como requisito indispensable para ocupar determinados cargos públicos, no es absoluta". En ella, el Pleno sostuvo que las personas mexicanas por nacimiento consideradas nacionales por otro Estado pueden acceder a los cargos reservados si cumplen el procedimiento establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad y presentan el certificado correspondiente.[24] Este criterio es

[24] Los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad establen los procedimientos, requisitos y modalidades para la obtención del Certificado de Nacionalidad Mexicana.

suficiente para el presente análisis, pues resuelve directamente los efectos que el ordenamiento mexicano atribuye al certificado.[25]

La misma interpretación fue desarrollada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el SUP-JDC-886/2015 sostuvo que el Certificado de Nacionalidad Mexicana permite a las personas que se encuentran en un supuesto de doble nacionalidad acreditar el requisito de elegibilidad previsto constitucionalmente. En el caso concreto, consideró válido el certificado presentado por una persona nacida en Estados Unidos y mexicana por nacimiento por ser hija de padre mexicano, por lo que confirmó su registro como candidato a diputado federal.[26] Posteriormente, en el SUP-RAP-87/2018 y su acumulado, relacionado con el registro de Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado de la República, confirmó que dicho documento era suficiente para cumplir el artículo 32 constitucional, sin que fuera exigible una constancia expedida por Canadá que acreditara la pérdida de la nacionalidad canadiense. [27]

La mayoría consideró que el candidato había agotado el procedimiento previsto por el ordenamiento mexicano y que exigirle una resolución extranjera habría significado imponer una condición de elegibilidad no establecida expresamente en la Constitución ni en la ley, con la consecuente restricción de su derecho a ser votado. De esta manera, el precedente delimitó el estándar probatorio vigente:

---

[25] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, tesis aislada P. III/2013 (9a.), registro digital 159866, *Nacionalidad mexicana por nacimiento. La prohibición de adquirir una diversa, como requisito indispensable para ocupar determinados cargos públicos, no es absoluta*, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009. Semanario Judicial de la Federación

[26] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, SUP-JDC-886/2015, pp. 15-20, especialmente pp. 16-17 y 19-20. Sentencia oficial

[27] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, SUP-RAP-87/2018 y SUP-RAP-89/2018 acumulados, pp. 86-91. Sentencia oficial

mientras la legislación nacional reconozca al Certificado como documento suficiente, las autoridades electorales no pueden exigir requisitos adicionales provenientes del derecho de otro país.

Sin embargo, este criterio también permite advertir los límites del régimen actual. La Sala Superior no determinó que la declaración realizada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores produjera la pérdida de la nacionalidad conforme al ordenamiento extranjero, sino únicamente que el Certificado acreditaba el cumplimiento del requisito exigido por el derecho mexicano. En consecuencia, su suficiencia jurídica y probatoria se circunscribe al ámbito nacional, pero no demuestra necesariamente que el otro Estado haya dejado de reconocer a la persona como su nacional.

Esta diferencia también fue desarrollada en los votos particulares formulados en el SUP-RAP-87/2018. Por una parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera sostuvo que debía distinguirse entre la nacionalidad extranjera atribuida desde el nacimiento y la adquirida voluntariamente mediante naturalización. Por otra, el magistrado José Luis Vargas Valdez consideró que el Certificado de Nacionalidad Mexicana no era suficiente para acreditar la pérdida del vínculo con otro Estado, pues una declaración unilateral no produce por sí misma su disolución mientras no exista una determinación de la autoridad extranjera competente.[28]

Aunque estos razonamientos no integraron el criterio mayoritario, ponen de manifiesto la diferencia entre cumplir el procedimiento previsto por el derecho

[28] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, SUP-RAP-87/2018 y SUP-RAP-89/2018 acumulados, voto particular del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pp. 113 y 132-137; y voto particular del magistrado José Luis Vargas Valdez, pp. 160-163. Sentencia y votos particulares

mexicano y acreditar que la otra nacionalidad dejó efectivamente de existir, insuficiencia que la iniciativa busca corregir.

Los criterios examinados son congruentes con el principio conforme al cual las restricciones al derecho a ser votado deben encontrarse expresamente previstas y no pueden ampliarse mediante interpretación judicial. Por ello, los tribunales han aplicado correctamente las reglas vigentes y han reconocido el Certificado como prueba suficiente. No obstante, esta solución deriva de una Constitución que se refiere a quienes "no adquieran otra nacionalidad" y de una legislación que acredita una declaración de renuncia, pero no necesariamente la desaparición efectiva del vínculo extranjero. La jurisprudencia, por tanto, no elimina el problema advertido por la iniciativa; por el contrario, demuestra que éste no puede resolverse únicamente mediante una interpretación distinta de las normas actuales.

En ese sentido, la incorporación de la expresión "no tener ni adquirir otra nacionalidad" resulta jurídicamente pertinente, porque establece de manera directa que, para ocupar los cargos objeto de la reforma, no basta con formular una renuncia ante las autoridades mexicanas, sino que debe existir un vínculo exclusivo de nacionalidad con el Estado mexicano. Con ello se amplía el supuesto constitucional para comprender tanto la nacionalidad atribuida desde el nacimiento como la obtenida posteriormente y se proporciona un fundamento expreso para adecuar los mecanismos de acreditación a ese nuevo estándar.

En suma, la iniciativa no desconoce los criterios jurisdiccionales ni resta validez al Certificado de Nacionalidad Mexicana conforme al régimen actual. Su propósito consiste en modificar de manera expresa el parámetro que esos criterios han interpretado: de una renuncia reconocida como suficiente dentro del orden jurídico

mexicano se transita hacia la exigencia constitucional de que no subsista otra nacionalidad. Esta precisión fortalece la certeza jurídica, reduce los márgenes de interpretación y asegura que quienes ocupen las titularidades ejecutivas comprendidas en la reforma mantengan un vínculo jurídico exclusivo con México, acorde con la responsabilidad constitucional, la representación del Estado y la naturaleza de las funciones que les corresponde ejercer.

6) Justificación de los cargos objeto de la reforma: soberanía, lealtad constitucional y naturaleza de las titularidades de los poderes ejecutivos federal, locales y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México

Esta Comisión dictaminadora considera que la exigencia propuesta debe analizarse a partir de la naturaleza constitucional de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y no mediante apreciaciones subjetivas sobre el patriotismo o la lealtad personal de quienes poseen otra nacionalidad.

Los artículos 80, 116 y 122 constitucionales establecen que estas titularidades son unipersonales y tienen a su cargo la dirección política y administrativa de sus respectivos órdenes de gobierno. A diferencia del Congreso de la Unión y de los órganos jurisdiccionales, cuya integración es colegiada, en los poderes ejecutivos la conducción y responsabilidad institucional se concentran en una sola persona.[29]

[29] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 50, 80, 94, 116 y 122. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Esta característica adquiere especial relevancia por la naturaleza continua de sus atribuciones. En el ámbito federal, la Presidencia ejerce facultades directamente relacionadas con la soberanía y los intereses fundamentales del Estado, entre ellas preservar la seguridad nacional, disponer de las Fuerzas Armadas, conducir la política exterior, celebrar tratados internacionales y dirigir la Administración Pública Federal. Las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque no ejercen atribuciones federales en materia de defensa o política exterior, encabezan las administraciones públicas locales y desempeñan funciones permanentes de gobierno, seguridad, coordinación y ejecución.[30]

En los órganos colegiados, la separación o abstención de uno de sus integrantes no necesariamente impide que el órgano continúe actuando. Asimismo, la legislación administrativa y judicial contempla impedimentos, excusas y mecanismos de sustitución ante determinados conflictos. En cambio, la persona titular de un Poder Ejecutivo no puede apartarse únicamente de los asuntos relacionados con el Estado cuya nacionalidad también posea ni trasladar temporalmente su responsabilidad constitucional, pues continúa siendo responsable de la conducción integral del gobierno.[31]

En este contexto, la **lealtad constitucional** debe entenderse como el deber jurídico objetivo de ejercer el cargo con sujeción a la Constitución, las leyes y el interés

---

[30] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 89, 90, 116 y 122. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[31] En cuanto a los mecanismos de excusa y sustitución, véanse el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf; el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF.pdf, y los artículos 80, 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

público mexicano. No equivale a una lealtad partidista, ideológica, cultural o sentimental, ni permite medir el grado de patriotismo de una persona. Los artículos 87, 109 y 128 constitucionales exigen desempeñar los cargos públicos con lealtad y guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; asimismo, el artículo 109 reconoce la lealtad como uno de los principios que rigen el servicio público.[32]

El antecedente constitucional de 1997 también resulta relevante. Si bien dicha reforma reconoció la posibilidad de que las personas mexicanas adquirieran otra nacionalidad sin perder la mexicana, el Poder Reformador consideró necesario reservar determinadas funciones a quienes estuvieran libres de vínculos jurídicos frente a otros Estados. La Suprema Corte ha precisado que esta clase de restricciones solamente puede justificarse cuando las atribuciones del cargo guarden una relación directa con la soberanía, la seguridad o los intereses fundamentales del Estado, por lo que no pueden extenderse indiscriminadamente a cualquier función pública.[33]

Por ello, el fundamento central de la reforma debe ubicarse en la **exclusividad del vínculo jurídico-político durante el acceso y ejercicio de las titularidades de los poderes ejecutivo federal, locales y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México**. La posesión de otra nacionalidad puede generar derechos y obligaciones frente a un Estado extranjero, como el ejercicio de derechos políticos, el uso de pasaporte o el acceso a protección diplomática. Esta concurrencia no

[32] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 87, 109 y 128. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[33] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021). Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 87/2018. Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5617045

acredita, por sí misma, una conducta desleal, pero sí representa la coexistencia objetiva de dos vínculos jurídico-políticos estatales.

Debe precisarse, además, que la doble nacionalidad no constituye por sí misma un conflicto de interés en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues esta figura se relaciona con intereses personales, familiares o de negocios que puedan afectar el desempeño imparcial de una función pública.[34] En consecuencia, **la iniciativa no debe sustentarse en una presunción general de deslealtad de las personas binacionales, sino en una medida preventiva, excepcional y funcional, vinculada con la estructura unipersonal del Poder Ejecutivo, la naturaleza de sus atribuciones y la imposibilidad de recurrir a mecanismos ordinarios de excusa o sustitución por asunto.**

En consecuencia, la justificación institucional de la reforma no consiste en exigir una demostración de sentimientos patrióticos, sino en asegurar que quienes encabecen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan, durante el acceso y ejercicio del cargo, un vínculo jurídico-político exclusivo con el Estado mexicano. Con ello se busca garantizar que sus decisiones se adopten únicamente conforme a la Constitución, las leyes y el interés público nacional, sin desconocer la dignidad, capacidad ni compromiso con México de las personas binacionales.

[34] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 3, fracción VI, y 58. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

7) Constitucionalidad, convencionalidad, igualdad y proporcionalidad

Esta Comisión parte del reconocimiento de que el derecho a ser votado constituye un derecho político fundamental, reconocido por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[35] No obstante, su ejercicio no es absoluto, pues el propio orden constitucional establece requisitos de elegibilidad para determinados cargos de elección popular. En este sentido, la propuesta de establecer la nacionalidad mexicana única no implica una prohibición general del derecho a ser votado, sino la incorporación de una condición específica vinculada con la naturaleza de las funciones que desempeñan quienes encabezan los Poderes Ejecutivos federal y locales.

Bajo esta perspectiva, la constitucionalidad de la medida debe analizarse a partir de que el requisito se encuentre objetivamente relacionado con las funciones del cargo, persiga una finalidad constitucionalmente legítima y resulte proporcional respecto de la afectación que pudiera generar al derecho de participación política. Asimismo, la medida no debe entenderse como una descalificación de las personas con doble nacionalidad, pues el artículo 1o. constitucional prohíbe la discriminación por origen

---

[35] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, artículo 35, fracción II, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2026, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf; Organización de los Estados Americanos, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, artículo 23, disponible en: https://cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm; Organización de las Naciones Unidas, *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, artículo 25, disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.

nacional y exige que toda diferencia de trato se encuentre sustentada en una justificación objetiva y razonable.[36]

En el caso concreto, la distinción se limita a quienes pretendan ejercer la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sin afectar su nacionalidad mexicana ni su participación política en términos generales. La propuesta persigue como finalidad preservar la soberanía nacional, la independencia en el ejercicio del poder público y la primacía del interés nacional en la toma de decisiones de quienes encabezan los Poderes Ejecutivos. La medida, por tanto, se encuentra delimitada a cargos de especial relevancia constitucional y no extiende la restricción a la totalidad de los derechos políticos ni a los demás cargos públicos.

La exigencia de renunciar a otra nacionalidad resulta adecuada para alcanzar esa finalidad, en tanto busca que deje de subsistir el vínculo jurídico de nacionalidad con otro Estado. Frente a posibles alternativas, como la declaración de intereses, el uso exclusivo del pasaporte mexicano, la renuncia al ejercicio de derechos políticos en otro país o determinadas obligaciones de abstención debe considerarse que dichas medidas podrían prevenir o transparentar posibles conflictos, pero no necesariamente extinguirían la nacionalidad extranjera. Por ello, si la finalidad específica de la reforma consiste en eliminar ese vínculo respecto de quienes

[36] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.), "Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general", registro digital 2012594, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012594; Primera Sala, tesis 1a. CCLXIII/2016 (10a.), "Test de proporcionalidad. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental", registro digital 2013156, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013156.

ejerzan las máximas responsabilidades ejecutivas, las alternativas señaladas no alcanzarían por sí mismas el mismo resultado.

Como se ha señalado previamente, este análisis encuentra correspondencia con el régimen constitucional mexicano, que distingue entre nacionalidad, ciudadanía y requisitos de elegibilidad. Los artículos 30, 32 y 35 de la Constitución establecen las bases relativas a la nacionalidad y los derechos de ciudadanía, mientras que los artículos 82, 116 y 122 prevén requisitos específicos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La reforma no introduce, por tanto, una lógica ajena al sistema constitucional, sino que modifica las condiciones de nacionalidad aplicables a quienes pretendan ejercer esos cargos, sin alterar la regla del artículo 37 constitucional conforme a la cual ninguna persona mexicana por nacimiento puede ser privada de su nacionalidad.

Por las razones expuestas, esta Comisión considera que la propuesta es compatible con el orden constitucional, al establecer una condición específica de elegibilidad vinculada con la naturaleza y responsabilidad de los cargos regulados. La medida no suprime la nacionalidad mexicana, no restringe de manera general los derechos políticos ni desconoce la legitimidad de la doble nacionalidad, sino que limita su aplicación a quienes pretendan encabezar los Poderes Ejecutivos federal, locales y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En consecuencia, su justificación debe entenderse exclusivamente en función de los cargos comprendidos en la reforma y no como una valoración negativa o una presunción de deslealtad respecto de las personas con doble nacionalidad.

8) Derecho comparado sobre requisitos de nacionalidad para altos cargos

El derecho comparado permite advertir que algunos ordenamientos jurídicos reconocen la doble nacionalidad, pero establecen restricciones específicas para acceder a los cargos públicos de mayor responsabilidad. Entre los casos más cercanos a la reforma analizada se encuentran República Dominicana y Venezuela.

República Dominicana (presidencia y vicepresidencia de República)[37] y Venezuela[38] (presidencia y vicepresidencia Ejecutiva de la República; presidencia y vicepresidencia de la Asamblea Nacional; magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; presidente del Consejo Nacional Electoral; procurador general de la República; contralor general de la República; fiscal general de la República, entre otros) ya establecen restricciones relacionadas con la doble nacionalidad para acceder a cargos de la más alta responsabilidad, mediante mecanismos que van desde la renuncia previa hasta la prohibición de poseer otra nacionalidad. Por tanto, México no pretende crear una figura aislada, sino incorporar a su propio orden constitucional una solución ya reconocida en el derecho comparado, adaptándola a su sistema federal y a la relevancia de los cargos comprendidos en la reforma.

[37] Constitución de la República Dominicana, artículo 20, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, versión publicada el 26 de febrero de 2025, https://www.tribunalconstitucional.gob.do/transparencia/base-legal-de-la-instituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n-de-la-rep%C3%BAblica-dominicana/

[38] CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2011). https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

9) Análisis del proyecto de decreto y régimen transitorio

9.1 Análisis de la reforma al artículo 82, párrafo primero, fracción I, párrafo primero

Por lo que corresponde al artículo 82 constitucional, la iniciativa reforma su párrafo primero y el primer párrafo de la fracción I, además de adicionar a esta última dos párrafos. Por razón de orden, esta Comisión analiza inicialmente las modificaciones relativas a la denominación del cargo y a los requisitos que deben reunirse para acceder a la Presidencia de la República.

En primer término, se sustituye la expresión "Para ser Presidente" por "**Para ser Presidente o Presidenta**". Esta modificación incorpora lenguaje incluyente en la denominación de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y reconoce expresamente que el cargo puede ser ejercido por mujeres u hombres. La misma adecuación se observa en la fracción I mediante las expresiones "**ciudadano o ciudadana", "hijo o hija" y "candidato o candidata".** Estos cambios no alteran el contenido sustantivo de los requisitos vigentes, pero actualizan la redacción constitucional y hacen visible la participación de las mujeres en el ejercicio del poder público.

En cuanto al contenido de la fracción I, la propuesta conserva el requisito de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento y encontrarse en pleno goce de sus derechos. Como se explicó anteriormente, nacionalidad y ciudadanía son conceptos relacionados, pero distintos. La nacionalidad constituye el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado, mientras que la ciudadanía presupone la nacionalidad mexicana y se reconoce a quienes han cumplido dieciocho años y reúnen los demás requisitos del artículo 34 constitucional. Esta

última condición permite el ejercicio de derechos políticos, entre ellos el derecho a ser votado, y conlleva también las obligaciones previstas por la Constitución.

La expresión "mexicana por nacimiento" precisa, a su vez, el origen de la nacionalidad exigida para ocupar la Presidencia. Por tanto, la disposición reúne dos condiciones concurrentes: poseer la nacionalidad mexicana desde el nacimiento y contar con la ciudadanía necesaria para ejercer plenamente los derechos políticos correspondientes.

A estos requisitos, la iniciativa agrega la cláusula consistente en "no tener ni adquirir otra nacionalidad". Los verbos empleados regulan dos situaciones diferentes. **"Tener"** se refiere a la existencia actual de un vínculo jurídico y político con otro Estado, con independencia de que esa nacionalidad haya sido atribuida desde el nacimiento; mientras que **"adquirir"** comprende la obtención posterior de otra nacionalidad mediante alguno de los mecanismos reconocidos por el orden jurídico extranjero. De esta manera, la propuesta no se limita al supuesto previsto actualmente en el artículo 32 constitucional, relativo a quienes "no adquieran otra nacionalidad", sino que incorpora expresamente el supuesto de quienes ya la poseen.

La prohibición, sin embargo, no es absoluta. La propia fracción establece que, cuando la persona tenga otra nacionalidad, deberá **"renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley"**. El pronombre "ella" se refiere a la otra nacionalidad y no a la ciudadanía, al ejercicio aislado de derechos políticos o a algún documento expedido por el Estado extranjero. Se trata de la renuncia al vínculo jurídico y político que une a la persona con ese Estado.

La disposición también fija el momento en que deberá cumplirse este requisito: antes de solicitar el registro de la candidatura. En consecuencia, la renuncia no podría realizarse después de obtener el registro, de resultar electa la persona o de asumir el cargo. La remisión a la ley permitirá desarrollar el procedimiento, las formalidades y los medios mediante los cuales deberá acreditarse su cumplimiento ante la autoridad competente.

Finalmente, la reforma conserva el requisito de **"haber residido en el país al menos durante veinte años".** Por tanto, las nuevas condiciones se incorporan de manera acumulativa a las ya previstas en la Constitución. En conjunto, el primer párrafo de la fracción I mantiene los requisitos actuales para acceder a la Presidencia y agrega una condición específica: que la persona aspirante tenga exclusivamente la nacionalidad mexicana o, si posee otra, renuncie a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

Una vez establecidos los requisitos para acceder a la Presidencia de la República, la iniciativa **adiciona un segundo** párrafo a la fracción I para disponer que "**quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana".** Esta disposición extiende la exigencia de nacionalidad única a todo el periodo durante el cual se ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

La primera prohibición consiste en no adquirir otra nacionalidad. A diferencia del párrafo anterior, que regula la situación de la persona antes del registro de su candidatura, esta disposición impide que, durante el ejercicio del cargo, se establezca un nuevo vínculo jurídico y político con otro Estado.

El párrafo también prohíbe **"solicitar"** otra nacionalidad. La distinción entre adquirir y solicitar resulta relevante, pues la primera expresión se refiere a la obtención de la nacionalidad, mientras que la segunda comprende el inicio del procedimiento dirigido a obtenerla, aun cuando todavía no haya sido concedida. De esta manera, la prohibición no se limita al resultado, sino que comprende también la actuación encaminada a producirlo.

Asimismo, se impide **"invocar"** ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. En este supuesto, la norma no se refiere a la obtención de una nueva nacionalidad, sino a hacer valer frente a otro Estado la calidad de nacional para producir consecuencias jurídicas. Con ello, la iniciativa exige que quien ejerza la Presidencia se ostente ante autoridades extranjeras únicamente con la nacionalidad mexicana.

El **tercer párrafo adicionado** precisa las conductas comprendidas en esta prohibición. **La primera** consiste en **utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero**. La norma se refiere expresamente al uso de estos documentos durante el ejercicio del cargo, en cuanto constituyen medios mediante los cuales una persona se identifica y actúa jurídicamente como nacional de otro Estado.

La **segunda conducta** consiste en **ejercer los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante ese Estado**. Esta prohibición comprende la actuación de la persona titular del Ejecutivo como integrante de la comunidad política de otro país. La referencia se limita a derechos de naturaleza política y, por tanto, no comprende por sí misma los vínculos familiares, sociales, culturales o económicos que una persona pueda mantener con el extranjero.

La **tercera conducta** es **acogerse a la protección diplomática de otro Estado**. Esta figura supone solicitar o aceptar que un país extranjero intervenga en favor de una persona bajo la consideración de que es su nacional. La prohibición busca evitar que quien representa al Estado mexicano invoque simultáneamente frente a otro Estado una relación jurídica de nacionalidad distinta de la mexicana.

Las conductas señaladas tienen en común que implican hacer valer, durante el ejercicio de la Presidencia, derechos o mecanismos de protección derivados de otra nacionalidad. De esta manera, el párrafo tercero desarrolla la prohibición general del párrafo anterior mediante la identificación de manifestaciones concretas de ese vínculo jurídico y político.

Finalmente, se establece que la contravención a estas disposiciones será sancionada en los términos del Título Cuarto de la Constitución. La norma no determina directamente una sanción única ni dispone que ésta opere de manera automática, sino que remite su determinación y aplicación al régimen constitucional de responsabilidades de las personas servidoras públicas y a los procedimientos que resulten aplicables.

En conjunto, los tres párrafos de la fracción I establecen una secuencia normativa: antes del registro de la candidatura, la persona que tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella; durante el ejercicio del cargo, no podrá adquirirla, solicitarla ni invocarla; y determinadas manifestaciones de ese vínculo quedan expresamente comprendidas en la prohibición y sujetas al régimen de responsabilidades. Con ello, la iniciativa busca que la condición de nacionalidad única no se agote en el momento de acceder a la Presidencia, sino que se mantenga durante todo el ejercicio del cargo.

9.2 Análisis de las reformas a los artículos 116 y 122

Por otra parte, la iniciativa pretende reformar el párrafo segundo, fracción I, párrafo quinto y adicionar un párrafo sexto a la misma fracción, del artículo 116 de la Constitución. En el párrafo reformado se incorporan las expresiones **"gobernador o gobernadora", "ciudadano o ciudadana", "candidato o candidata"** y **"nativo o nativa"**, con lo cual se adopta lenguaje incluyente sin alterar la naturaleza de los requisitos vigentes.

Asimismo, se trasladan a las gubernaturas los requisitos previamente analizados para la Presidencia de la República: ser **"un ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento que no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley**. Estas condiciones se agregan a los requisitos vigentes de ser originario de la entidad o contar con una residencia efectiva no menor de cinco años, así como tener treinta años cumplidos el día de la elección, o una edad menor cuando así lo permita la Constitución local.

El párrafo sexto adicionado reproduce las prohibiciones aplicables durante el ejercicio del cargo, por lo que resulta aplicable el análisis efectuado respecto del artículo 82. Sin embargo, en este caso se incorpora la expresión **"entre otros supuestos"**, antes de enumerar el uso de pasaporte o documento extranjero, el ejercicio de derechos políticos y la protección diplomática. Esta expresión otorga a dichas conductas un carácter enunciativo y no limitativo, de manera que la prohibición podría comprender otros actos mediante los cuales se invoque una nacionalidad distinta de la mexicana.

Otra diferencia consiste en que la contravención se sancionará conforme al Título Cuarto de la Constitución Federal y a las constituciones de las entidades federativas. La remisión incorpora tanto el régimen federal de responsabilidades como las disposiciones constitucionales locales aplicables a quienes ejerzan las gubernaturas.

Respecto del artículo 122, la iniciativa reforma el párrafo segundo de la fracción III del apartado A y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente en su orden. En primer término, se sustituye la denominación **"Jefe de Gobierno" por "Jefe o Jefa de Gobierno"** y se incorporan las expresiones "**ciudadana o ciudadano" y "candidato o candidata",** en congruencia con el lenguaje incluyente utilizado en los artículos anteriores.

La disposición conserva la facultad de la Constitución Política de la Ciudad de México para establecer las atribuciones y los requisitos de quien ocupe la Jefatura de Gobierno. No obstante, mediante la expresión **"en todo caso"** fija directamente un requisito constitucional mínimo: ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si se posee, renunciar a ella antes de solicitar el registro de la candidatura.

El párrafo tercero adicionado reproduce las prohibiciones y conductas previstas para la Presidencia y las gubernaturas. También emplea la expresión **"entre otros supuestos",** por lo que la enumeración de conductas no tiene carácter limitativo. La diferencia se encuentra en el régimen sancionador, pues la contravención se sujetará al Título Cuarto de la Constitución Federal y a la Constitución Política de la Ciudad de México.

De esta manera, los artículos 116 y 122 extienden a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el régimen previsto para la Presidencia de la República, con las adecuaciones correspondientes a su ámbito local. Con ello se establece una regla constitucional común para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales, sin modificar los demás requisitos previstos para cada cargo.

9.3 Análisis del régimen transitorio

El régimen transitorio se integra por seis disposiciones destinadas a ordenar la entrada en vigor, aplicación e implementación de la reforma, así como a regular la situación de quienes actualmente ejercen los cargos y de los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad.

El artículo **Primero** dispone que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta fecha determina su incorporación formal al orden constitucional y constituye el punto de partida para computar los plazos de noventa días naturales previstos para las adecuaciones legislativas federales y locales.

El artículo **Segundo** establece que las disposiciones del decreto serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028. Por tanto, debe distinguirse entre la entrada en vigor de la reforma y el momento a partir del cual sus requisitos serán exigibles: el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero sus efectos electorales comenzarán en el proceso señalado y continuarán para los procesos posteriores.

Este periodo permite que, antes de la aplicación de los nuevos requisitos, se realicen las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad, a la legislación electoral y a los ordenamientos de las entidades federativas, de conformidad con lo que dispone el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 constitucional, entre otros ordenamientos aplicables.

El artículo **Tercero** determina que la reforma no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la fecha de su entrada en vigor. En consecuencia, las nuevas condiciones de nacionalidad y las prohibiciones previstas durante el ejercicio del cargo no modificarán la situación jurídica de quienes ya ocupen esas titularidades.

El artículo **Cuarto** otorga al Congreso de la Unión un plazo de noventa días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, de conformidad con lo que dispone el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 constitucional, entre otros ordenamientos aplicables. Estas modificaciones deberán desarrollar los términos de la renuncia a otra nacionalidad y las reglas necesarias para acreditar el cumplimiento del requisito antes del registro de las candidaturas.

El plazo comienza con la entrada en vigor del decreto y no con su aplicación electoral en 2028. De esta manera, la legislación secundaria deberá estar adecuada antes de que los nuevos requisitos resulten exigibles.

El artículo **Quinto** establece que los certificados de nacionalidad mexicana expedidos antes de la entrada en vigor conservarán su validez y producirán plenos

efectos respecto de los cargos y funciones distintos de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La disposición no invalida de manera general los certificados previamente expedidos, sino que delimita sus efectos respecto de los tres cargos objeto de la reforma. Para acceder a estas titularidades, el cumplimiento del requisito deberá sujetarse al nuevo régimen constitucional y a las adecuaciones que se realicen a la Ley de Nacionalidad.

Finalmente, el artículo **Sexto** concede a las entidades federativas el mismo plazo de noventa días naturales para armonizar sus constituciones y su legislación electoral. Esta obligación comprende tanto las disposiciones aplicables a las gubernaturas como las correspondientes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La disposición agrega que, mientras se realiza la armonización, el decreto será de aplicación directa. Esto significa que la falta de adecuación de una constitución o ley local no impedirá la observancia de la reforma constitucional. Esta aplicación directa deberá entenderse conforme al artículo Segundo transitorio, es decir, a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028.

En conjunto, las disposiciones transitorias establecen una secuencia definida: el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación; las adecuaciones federales y locales deberán realizarse dentro de los noventa días naturales siguientes; quienes ya ejercen los cargos quedan fuera de su aplicación; los certificados anteriores conservan sus efectos para los demás cargos y funciones; y los nuevos requisitos serán exigibles a partir del proceso electoral de 2028.

10) Evaluación de impacto presupuestario

Esta Comisión dictaminadora advierte que la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal se acompañó de la evaluación y del correspondiente dictamen de impacto presupuestario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los artículos 18, 19 y 20 de su Reglamento.

Mediante el oficio número **411/UDPCSG/2026/20797**, de fecha 27 de agosto de 2026, suscrito por el licenciado **Agustín Rodríguez Bello**, titular de la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emitió el dictamen de impacto presupuestario de la *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y locales.*

En dicho dictamen se señala que la iniciativa no contempla la creación o modificación de unidades administrativas, plazas o nuevas instituciones; no afecta el presupuesto de los programas aprobados, ni establece nuevas atribuciones o actividades que requieran mayores asignaciones presupuestarias.

En consecuencia, la citada Unidad determinó que la iniciativa **no genera un impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal**, por lo que no existe inconveniente para continuar con los trámites correspondientes ante las instancias competentes.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la iniciativa no genera un impacto presupuestario adicional, toda vez que su implementación no requiere crear estructuras administrativas, plazas, instituciones o nuevas atribuciones, ni efectuar mayores asignaciones con cargo al presupuesto público.

QUINTA. CONCLUSIONES

Del análisis integral de la iniciativa, esta Comisión Dictaminadora concluye que la reforma atiende una insuficiencia objetiva del régimen constitucional y legal vigente. Si bien el artículo 32 de la Constitución reserva determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, su redacción no comprende de manera inequívoca los casos en que ésta se posea desde el nacimiento. Asimismo, el Certificado de Nacionalidad Mexicana acredita la declaración de renuncia formulada ante las autoridades nacionales, pero no demuestra necesariamente que el otro Estado haya dejado de reconocer a la persona como su nacional.

En este sentido, la incorporación de la expresión **"no tener ni adquirir otra nacionalidad"** no constituye una modificación meramente terminológica, sino un cambio en el estándar constitucional de elegibilidad. La reforma comprende tanto la nacionalidad atribuida desde el nacimiento como la obtenida posteriormente y exige que, antes del registro de la candidatura, haya cesado efectivamente el vínculo jurídico-político con el otro Estado, conforme a la legislación extranjera aplicable. Con ello se supera la diferencia entre una declaración de renuncia realizada ante México y la pérdida jurídica de la nacionalidad extranjera.

La medida encuentra una justificación institucional en la naturaleza de los cargos comprendidos. La Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México son titularidades unipersonales que concentran la dirección política y administrativa de sus respectivos órdenes de gobierno y exigen el ejercicio permanente y continuo de sus atribuciones. En el ámbito federal, además, la Presidencia interviene directamente en materias vinculadas con la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, la política exterior, la celebración de tratados y la representación del Estado mexicano.

A diferencia de quienes integran órganos colegiados, las personas titulares de los Poderes Ejecutivos no pueden apartarse de manera constante de determinados asuntos ni trasladar temporalmente su responsabilidad constitucional cuando una decisión involucre al Estado cuya nacionalidad también posean. Por ello, la exclusividad del vínculo jurídico-político constituye una garantía relacionada con la unidad, continuidad y responsabilidad de la función ejecutiva.

Esta Comisión precisa que la reforma no parte de una presunción de deslealtad ni cuestiona el patriotismo, la capacidad o la integridad de las personas binacionales. La doble nacionalidad continúa reconocida por el orden constitucional mexicano y no impide, con carácter general, la participación en la vida pública. La exigencia se limita a tres titularidades ejecutivas y permite que la persona que posea otra nacionalidad pueda aspirar a ellas siempre que renuncie efectivamente antes de solicitar el registro de su candidatura.

La medida también resulta compatible con los principios de igualdad y proporcionalidad, pues persigue una finalidad constitucional legítima y de mayor

alcance, establece una condición objetiva y verificable y delimita expresamente su ámbito personal y temporal de aplicación. No se restringen indiscriminadamente los derechos políticos de todas las personas binacionales ni se extiende el requisito a cargos que no presentan las mismas características. Por tanto, la diferencia de trato se sustenta en la naturaleza y las responsabilidades de las funciones ejecutivas comprendidas, y no exclusivamente en una condición personal de quienes aspiran a ejercerlas.

Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no impiden esta modificación. Dichos órganos han reconocido que, conforme al régimen vigente, el Certificado de Nacionalidad Mexicana es suficiente para acreditar el requisito de elegibilidad y que las autoridades electorales no pueden exigir condiciones adicionales que no estén expresamente previstas. Precisamente por ello, la iniciativa modifica de manera directa el parámetro constitucional, a fin de que la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera constituya una exigencia expresa y no el resultado de una interpretación extensiva.

El derecho comparado confirma que esta clase de condiciones no es ajena a los sistemas constitucionales contemporáneos. Países como República Dominicana y Venezuela reconocen la doble nacionalidad y, simultáneamente, establecen requisitos especiales relacionados con la renuncia o la inexistencia de otra nacionalidad para acceder a determinados cargos de alta responsabilidad. La propuesta adapta este tipo de garantía al sistema federal mexicano y la circunscribe a las personas que encabecen los Poderes Ejecutivos federal y locales.

La reforma no se agota en el momento de la elección. Durante el ejercicio del cargo, prohíbe adquirir, solicitar o invocar otra nacionalidad y precisa conductas incompatibles con esta obligación, como utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado o acogerse a su protección diplomática. La remisión al régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto constitucional asegura que cualquier incumplimiento sea determinado mediante los procedimientos y garantías aplicables, sin establecer consecuencias automáticas.

Para garantizar su adecuada instrumentación, la legislación secundaria deberá definir los documentos idóneos para acreditar la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera, así como las reglas de traducción, apostilla, legalización y verificación de autenticidad, entre otros elementos que se consideren viables. La intervención técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores podría contribuir a la comprobación de que la renuncia produjo efectos definitivos conforme al ordenamiento extranjero, evitando que una solicitud pendiente o una simple manifestación de voluntad se considere suficiente.

El régimen transitorio proporciona condiciones adecuadas para su aplicación, al disponer las adecuaciones federales y locales dentro de los noventa días naturales siguientes; excluir a quienes se encuentren ejerciendo actualmente los cargos; conservar los efectos de los certificados previamente expedidos respecto de otras funciones, y establecer que los nuevos requisitos serán exigibles a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. Asimismo, se encuentra acreditado que su implementación no generará un impacto presupuestario adicional.

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa es constitucionalmente legítima, institucionalmente justificada y jurídicamente viable. Su aprobación permitirá contar con una regla clara, uniforme y verificable que asegure que quienes encabecen la Presidencia de la República, las gubernaturas de las entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ejerzan sus atribuciones bajo un vínculo jurídico-político exclusivo con México, con plena sujeción a la Constitución, las leyes y el interés público nacional. Por estas razones, se estima procedente aprobar el proyecto de decreto sometido a consideración.

Dicho lo anterior y para mayor entendimiento del lector de este dictamen, a continuación, se presenta cuadro comparativo entre el texto constitucional vigente, y el texto propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta H. Cámara de Diputados:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA POR LA PRESIDENTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**	**TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS**
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:	**Artículo 82.** Para ser Presidente **o Presidenta** se requiere:	**Artículo 82.** Para ser Presidente **o Presidenta** se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.	**I.** Ser ciudadano **o ciudadana** mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo **o hija** de padre o madre mexicanos; **no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley**, y haber residido en el	**I.** Ser ciudadano **o ciudadana** mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo **o hija** de padre o madre mexicanos; **no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley**, y haber residido en el

	país al menos durante veinte años.	país al menos durante veinte años.
Sin correlativo	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.**	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.**
Sin correlativo	**Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título**	**Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título**

	Cuarto de esta Constitución.	**Cuarto de esta Constitución.**
II. a VIII. ...	**II. a VIII. ...**	**II. a VIII. ...**
Artículo 116. ...	**Artículo 116. ...**	**Artículo 116. ...**
...	**...**	**...**
I. ...	**I. ...**	**I. ...**
...	**...**	**...**
...	**...**	**...**
...	**...**	**...**
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento ~~y nativo de él~~, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el	Sólo podrá ser gobernador o **gobernadora** constitucional de un Estado un ciudadano o **ciudadana** mexicana por nacimiento que **no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como**	Sólo podrá ser gobernador o **gobernadora** constitucional de un Estado un ciudadano o **ciudadana** mexicana por nacimiento que **no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como**

día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.	**candidato o candidata en los términos que establezca la ley, así como ser nativo o nativa de dicho Estado,** o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.	**candidato o candidata en los términos que establezca la ley, así como ser nativo o nativa de dicho Estado,** o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.
Sin correlativo	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un**	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un**

	Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de las constituciones de las entidades federativas.	Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de las constituciones de las entidades federativas.
II. a X. …	II. a X. …	II. a X. …
…	…	…
Artículo 122. …	Artículo 122. …	Artículo 122. …
A. …	A. …	A. …
I. y II. …	I. y II. …	I. y II. …
III. …	III. …	III. …

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.	La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe **o Jefa** de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. **En todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.**	La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe **o Jefa** de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. **En todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.**
Sin correlativo	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en**	**Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en**

	esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de la Constitución Política de la Ciudad de México.	esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de la Constitución Política de la Ciudad de México.
…	…	…
IV. a XI. …	IV. a XI. …	IV. a XI. …
B. a D. …	B. a D. …	B. a D. …

	Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.	**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
	Segundo. Lo dispuesto en este Decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028.	**Segundo.** Lo dispuesto en este Decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028.
	Tercero. Lo dispuesto en este Decreto no será aplicable a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.	**Tercero.** Lo dispuesto en este Decreto no será aplicable a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.
	Cuarto. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales	**Cuarto.** El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales

	siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.	siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
	Quinto. Los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conservarán su validez y surtirán plenos efectos respecto de los cargos y funciones distintos de los señalados en los artículos 82, 116, fracción I, y 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	**Quinto.** Los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conservarán su validez y surtirán plenos efectos respecto de los cargos y funciones distintos de los señalados en los artículos 82, 116, fracción I, y 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	Sexto. Las entidades federativas armonizarán sus constituciones y su legislación electoral con lo dispuesto en el presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en	**Sexto.** Las entidades federativas armonizarán sus constituciones y su legislación electoral con lo dispuesto en el presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en

	vigor. En tanto, lo dispuesto en este Decreto será de aplicación directa.	vigor. En tanto, lo dispuesto en este Decreto será de aplicación directa.

D. RESULTADO DEL DICTAMEN

PRIMERO: Han sido fundados y analizados a profundidad, por esta Comisión de Puntos Constitucionales, los razonamientos, argumentos y alcances de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

SEGUNDO: En mérito de lo anterior, esta Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión **resuelve aprobar en sentido positivo, sin modificaciones y en sus términos,** el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

E. TEXTO CONSTITUCIONAL REFORMADO Y RÉGIMEN TRANSITORIO:

En este sentido, como resultado del análisis y estudio de las iniciativas referidas, esta Comisión de Puntos Constitucionales formula el Proyecto de Decreto **en sentido positivo, sin modificaciones y en sus términos**, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES

Artículo Único. Se **REFORMAN** los artículos 82, párrafo primero y su fracción I, párrafo primero; 116, párrafo segundo, fracción I, párrafo quinto, y 122, apartado A, fracción III, párrafo segundo, y se **ADICIONAN** a los artículos 82, fracción I, párrafos segundo y tercero; 116, párrafo segundo, fracción I, párrafo sexto, 122, apartado A, fracción III, párrafo tercero, y se recorre el subsecuente en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. Para ser Presidente **o Presidenta** se requiere:

I. Ser ciudadano **o ciudadana** mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo **o hija** de padre o madre mexicanos; **no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su**

registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

II. a VIII. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

...

...

...

Sólo podrá ser gobernador **o gobernadora** constitucional de un Estado un ciudadano **o ciudadana** mexicana por nacimiento **que no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, así como ser nativo o nativa de dicho Estado**, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.

Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de las constituciones de las entidades federativas.

II. a X. ...

...

Artículo 122. ...

A. ...

I. y II. ...

III. ...

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe **o Jefa** de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. **En todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.**

Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, y de la Constitución Política de la Ciudad de México.

...

IV. a XI. ...

B. a D. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Lo dispuesto en este Decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028.

Tercero. Lo dispuesto en este Decreto no será aplicable a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.

Cuarto. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto. Los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conservarán su validez y surtirán plenos efectos respecto de los cargos y funciones distintos de los señalados en los artículos 82, 116, fracción I, y 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. Las entidades federativas armonizarán sus constituciones y su legislación electoral con lo dispuesto en el presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor. En tanto, lo dispuesto en este Decreto será de aplicación directa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de septiembre de 2026.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS **LXVI LEGISLATURA**

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 08/09/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Presidencia				
Godoy Rangel Leonel	MORENA			
Secretaria				
Brito Zapata Óscar Iván	MORENA			
Castellanos Polanco Favio	MORENA			
Castillo Lozano Katia Alejandra	MORENA			
Estrada Domínguez Francisco Javier	MORENA			
Jiménez Godoy Gabriela Georgina	MORENA			
Moreno Rivera Julio César	MORENA			

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 09/09/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Peña Villa José Alejandro	MORENA			
Santiago Rodríguez Guillermo Rafael	MORENA			
Valdepeñas González Gabriela	MORENA			
Rubio Fernández Paulina	PAN			
Luna Ayala Noemí Berenice	PAN			
Carrillo Soberanis Juan Luis	PVEM			
Silva Andraca Ruth Maricela	PVEM			

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 08/09/2020

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Aguilar Gil Lilia 	PT			
Garay Loredo Irma Yordana 	PT			
Domínguez Domínguez César Alejandro 	PRI			
Ruiz Massieu Salinas Claudia 	MC			

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 04/04/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G.P	A FAVOR	EN CONTRA	ASBTENCIÓN
Arreola López Haidyd 	MORENA			
Astudillo Suárez Ricardo 	PVEM			
Bautista Peláez María del Carmen 	MORENA			
Benítez Tiburcio Mariana 	MORENA			
Bernal Martínez Mary Carmen 	PT			

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 08/01/2025

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Cárdenas Galván Clara	MORENA			
Carrillo Cubillas Mario Miguel	MORENA			
Cornejo Gómez Astrit Viridiana	MORENA			
Döring Casar Federico	PAN			
Fernández Martínez José Luis	PVEM			

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 08/01/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Guevara Garza Carlos Alberto	PVEM			
Hernández García Laura	MC			
Hernández Mirón Carlos	MORENA			
Márquez Alcalá Laura Cristina	PAN			
Jasso Nieto Ofelia Socorro	PRI			
Navarro Acevedo Nadia	PRI			

H. CÁMARA DE DIPUTADOS **LXVI LEGISLATURA**

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 08/09/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Ramírez Cuellar Alfonso 	MORENA			
Orozco Caballero María del Rosario 	MORENA			
Reyes De la Torre Irais Virginia 	MC			
Sánchez Cordero Dávila Olga María 	MORENA			
Santana González Ana Erika 	PVEM			
Torres Granciano Fernando 	PAN			

7

Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN **DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** **FECHA:** 08/09/2026

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

DIPUTADO	G. P.	SENTIDO DEL VOTO FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Vázquez Arellano Manuel 	MORENA			
Vázquez Vázquez Alfredo 	MORENA			
Vences Valencia Julieta Kristal 	MORENA			
Zagal Ramírez Xóchitl Nashielly 	MORENA			

	FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
TOTAL	25	5	Ø

8

M1

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

22 SEP 2026

RECIBIDO

SALÓN DE SESIONES PLENO

PAN LXVI LEGISLATURA

MOCIÓN SUSPENSIVA RESPECTO DEL "DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES", EN LO SUCESIVO "DICTAMEN", QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
CÁMARA DE DIPUTADOS
22 SEP 2026
RECIBIDO
SALÓN DE SESIONES

DIP. RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ
Presidente de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
LXVI Legislatura

Las Diputadas y los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 114, numeral 1, fracción IX, y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Mesa Directiva la siguiente MOCIÓN SUSPENSIVA respecto del "DICTAMEN", con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

a. El 30 de agosto de 2026, el Ejecutivo Federal remitió al Congreso de la Unión la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales".

b. El 1 de septiembre de 2026, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, en la sesión del 2 de septiembre de 2026, se informó de su recepción y turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

c. El 8 de septiembre de 2026, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el "DICTAMEN". Durante la sesión, Diputada y Diputados Federales integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitaron la realización de foros con carácter de parlamento abierto con la participación de personas migrantes para el análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y así garantizar sus derechos.

d. El 9 de septiembre de 2026, el "DICTAMEN" cumplió el trámite de declaratoria de publicidad ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

e. El día de hoy, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha sometido el "DICTAMEN" a la consideración de esta Soberanía para su discusión y votación.

II. CONSIDERACIONES

a. Que el artículo 114, numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados reconoce la moción para la suspensión de una discusión o moción suspensiva.

b. Que el artículo 122, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la moción suspensiva es un recurso del procedimiento legislativo para interrumpir la discusión de un asunto puesto a consideración del Pleno.

c. Que el artículo 122, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que la moción suspensiva deberá presentarse por escrito, firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, antes de que se inicie la discusión en lo general; señalar el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.

d. Que el artículo 122, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que, si la moción suspensiva cumple los requisitos correspondientes, la Presidencia solicitará a la Secretaría dar lectura al documento, ofrecerá el uso de la palabra a uno de sus autores y a

un impugnador, si lo hubiera, y someterá al Pleno, en votación económica, si se toma en consideración de manera inmediata.

III. MOTIVO DE LA MOCIÓN SUSPENSIVA

Las Diputadas y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, promoventes de la presente MOCIÓN SUSPENSIVA, advertimos que no existen condiciones para discutir y votar el "DICTAMEN", debido a la premura del procedimiento legislativo, la falta de participación de las personas mexicanas residentes en el exterior y la ausencia de un análisis suficiente sobre las consecuencias constitucionales, convencionales, electorales y prácticas de la reforma.

El "DICTAMEN" no se limita a establecer una regla de conducta durante el ejercicio de un cargo público, sino que condiciona el registro de una candidatura a que la persona mexicana por nacimiento renuncie previamente a otra nacionalidad, incluso cuando ésta le haya sido atribuida desde su nacimiento y no derive de una decisión voluntaria obligándola a modificar el estado jurídico personal como condición para ejercer el derecho a ser votada.

La protección de la soberanía nacional constituye una finalidad legítima, pero es indispensable que esta Soberanía funde y motive debidamente si la qué la medida es idónea, indispensable y proporcional. Por otra parte, la propuesta no permite presumir que toda persona con doble nacionalidad mantiene una lealtad disminuida hacia México.

a. AUSENCIA DE FOROS CON EL CARÁCTER DE PARLAMENTO ABIERTO CON PERSONAS MEXICANAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

La reforma constitucional contenida en el "DICTAMEN" incide de manera directa en mexicanas y mexicanos que, por nacimiento, filiación, residencia o de conformidad con el marco jurídico de otro Estado, poseen una segunda nacionalidad. Muchas de estas personas

forman parte de comunidades migrantes y binacionales que mantienen vínculos familiares, económicos, culturales y políticos permanentes con México; sin embargo, el procedimiento legislativo no incorporó un espacio suficiente para escuchar sus opiniones y experiencias ni para conocer las consecuencias reales que implicaría obligarlas a renunciar a su segunda nacionalidad.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal el 27 de agosto del presente año; el 2 de septiembre fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; el 8 del mismo mes fue aprobada por dicha Comisión, y el 9 de septiembre de 2026 cumplió el trámite de declaratoria de publicidad. En ese lapso, el Ejecutivo Federal no informó sobre la realización de foros o consultas para la elaboración de la iniciativa y, durante el proceso legislativo desarrollado en esta Cámara de Diputados, no se realizó un parlamento abierto ni se convocó de manera efectiva a organizaciones de personas migrantes, comunidades mexicanas en el exterior, especialistas en derecho de la nacionalidad, autoridades electorales o representaciones consulares para examinar una reforma que modifica las condiciones de acceso a los cargos de elección popular de mayor relevancia en el país.

Las Diputadas y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sostenemos que, por el alcance de la restricción y la complejidad transnacional de sus efectos, el Congreso tenía el deber democrático de garantizar una deliberación amplia, informada e incluyente. La representación política no se agota en recibir una iniciativa y aprobarla en unos cuantos días; exige conocer a quién afecta, de qué manera lo afecta y si el objetivo perseguido puede alcanzarse sin excluir de manera general a una parte de la ciudadanía mexicana.

La ausencia de participación resulta especialmente contradictoria con la política constitucional que, desde 1997, reconoció la realidad de la doble nacionalidad y buscó preservar el vínculo jurídico de México con sus comunidades en el exterior. La reforma

cambia el sentido de esa política para el ejercicio de determinados derechos políticos, pero lo hace sin explicar por qué debe revisarse esa decisión histórica ni ponderar el mensaje de exclusión que se envía a millones de familias binacionales.

Antes de continuar con la discusión y votación del "DICTAMEN" debe recabarse opiniones de especialistas y organizaciones representativas de las personas mexicanas residentes en el extranjero. Esa deliberación debe permitir distinguir las realidades jurídicas de cada forma de adquisición de otra nacionalidad y evaluar los efectos familiares, patrimoniales y personales de una renuncia definitiva.

En estas condiciones se advierte que la ausencia de foros de parlamento abierto es contraria de los principios de deliberación democrática, transparencia parlamentaria y participación ciudadana efectiva que deben regir la actuación del Congreso de la Unión previo a la creación o modificación de normas con implicaciones constitucionales y en materia de derechos humanos.

Por su naturaleza y alcance, el "DICTAMEN" exigía un proceso deliberativo amplio, incluyente y plural que permitiera la participación sustantiva de la sociedad civil, la academia, los colegios de profesionistas y, especialmente, de las personas y comunidades directamente afectadas. No obstante, el procedimiento seguido no generó espacios efectivos para escuchar sus planteamientos ni garantizó que sus opiniones, propuestas y advertencias fueran consideradas durante la elaboración y aprobación del dictamen.

El parlamento abierto no se limita a la simple consulta o difusión de iniciativas o productos legislativos, sino que exige mecanismos que permitan conocer, analizar y considerar las

observaciones formuladas por la ciudadanía, de manera que puedan incidir efectivamente en el contenido de los dictámenes.

En consecuencia, la falta de foros con carácter de parlamento abierto durante la discusión y aprobación del "DICTAMEN" constituye una deficiencia sustancial del proceso legislativo. La ausencia de una deliberación pública, plural y efectiva debilita la legitimidad de las modificaciones propuestas, reduce la calidad democrática de la decisión parlamentaria y contraviene los principios de participación y transparencia que deben orientar la actividad legislativa.

La omisión de dichos foros significa legislar de espaldas a la ciudadanía y sin la deliberación pública que debe sustentar las decisiones de todo Estado democrático de derecho.

b. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ordena interpretar las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia y prohíbe la discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 35, fracción II, reconoce el derecho de la ciudadanía a ser votada para todos los cargos de elección popular, con las calidades establecidas en la ley.

En el ámbito convencional, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegido, así como acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Aunque la propia Convención admite que la ley regule el ejercicio de esos derechos

por razones de nacionalidad, ello no autoriza restricciones arbitrarias, innecesarias o carentes de proporcionalidad. Por su parte, los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen la participación política sin restricciones indebidas y la igualdad ante la ley.

El "DICTAMEN" establece un trato diferenciado entre personas mexicanas por nacimiento: quienes sólo poseen la nacionalidad mexicana podrán solicitar su registro, mientras quienes tengan además otra nacionalidad deberán extinguirla previamente. Esta diferencia incide directamente en el derecho a ser votado y exige una justificación objetiva y reforzada vinculada con las funciones concretas de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La restricción es especialmente severa para quien posee otra nacionalidad desde el nacimiento. En ese supuesto no existe una conducta voluntaria que permita atribuirle deslealtad o una decisión consciente de someterse a otro Estado, es decir, la nacionalidad puede derivar del lugar de nacimiento, de la filiación o de una norma extranjera. El "DICTAMEN" impone la misma consecuencia a quien adquirió voluntariamente otra nacionalidad y a quien la posee desde el nacimiento, pese a que se trata de situaciones jurídicas materialmente distintas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, al examinar requisitos de nacionalidad para el acceso a diversos cargos públicos, que tener doble o múltiple nacionalidad no influye por sí mismo en los méritos o capacidades de una persona y que las diferencias de trato deben contar con una justificación objetiva. Así se desprende, entre otros precedentes, de las acciones de inconstitucionalidad 111/2019, 260/2020 y 138/2021 que, aunque se refieren a cargos distintos, ofrecen un parámetro relevante para exigir que toda restricción basada en la nacionalidad sea razonable y proporcional respecto de las funciones del cargo.

La reforma parte de una presunción general: que la sola existencia de otra nacionalidad puede producir un conflicto de lealtad. Sin embargo, un vínculo jurídico con otro Estado no acredita por sí mismo subordinación, conflicto de intereses, falta de compromiso con México o ejercicio indebido de protección diplomática.

La lealtad constitucional se acredita mediante el cumplimiento de la ley y el ejercicio responsable del cargo, no por la cantidad de nacionalidades que una persona posea.

La incorporación en el texto constitucional de una sospecha general sobre las personas con doble nacionalidad normaliza un criterio de exclusión y estigmatización. Además, reduce el universo de opciones de la ciudadanía y limita la posibilidad de que mexicanas y mexicanos con experiencia internacional, vínculos comunitarios y capacidad acreditada participen en la vida pública del país.

c. AUSENCIA DE DIAGNÓSTICO Y FALTA DE PROPORCIONALIDAD

El "DICTAMEN" invoca la soberanía nacional, la prevención de conflictos de lealtad y la necesidad de asegurar un vínculo jurídico exclusivo con México. No obstante, no identifica hechos documentados que demuestren que la doble nacionalidad de quien haya encabezado un Poder Ejecutivo produjo una afectación concreta a la independencia del Estado, al ejercicio de sus atribuciones o a la defensa de los intereses nacionales.

Una reforma constitucional no puede sustentarse únicamente en hipótesis abstractas o en señalamientos dirigidos contra una persona determinada. Las normas constitucionales deben ser generales, impersonales y construidas a partir de un problema público acreditado y, en caso de que el objetivo sea prevenir conflictos de intereses o actos de subordinación frente a otro Estado, el "DICTAMEN" debe precisar qué conductas pretende evitar, qué riesgos han ocurrido y por qué el marco vigente resulta insuficiente.

La finalidad invocada puede ser constitucionalmente legítima, pero la idoneidad de la medida no está demostrada. La extinción formal de otra nacionalidad no elimina por sí sola vínculos familiares, patrimoniales, económicos o culturales con otro país y tampoco asegura una mayor lealtad institucional. Por el contrario, una persona con nacionalidad exclusivamente mexicana puede mantener intereses en el extranjero y una persona con doble nacionalidad puede acreditar una trayectoria completa de servicio y compromiso con México.

La medida tampoco supera el examen de necesidad, esto es, el "DICTAMEN" contempla prohibiciones específicas durante el ejercicio del cargo: no adquirir ni solicitar otra nacionalidad, no invocarla ante autoridades extranjeras, no utilizar pasaporte o documento de identidad extranjero, no ejercer derechos políticos ante otro Estado y no acogerse a su protección diplomática. Esas medidas se dirigen al riesgo concreto que la reforma pretende evitar, pero el "DICTAMEN" no explica por qué serían insuficientes ni por qué resulta indispensable exigir, además, la renuncia definitiva.

En sentido estricto, el beneficio hipotético para la soberanía no ha sido contrastado con el costo que la medida impone al derecho a ser votado, a la igualdad y a la situación jurídica personal de la ciudadanía. La renuncia puede afectar derechos familiares, sucesorios, patrimoniales, laborales, de residencia y de movilidad, según la legislación del Estado correspondiente. El "DICTAMEN" no estudia esos efectos ni acredita que la afectación sea proporcional al beneficio que pretende obtener.

El "DICTAMEN" tampoco cumple con el requisito de necesidad. La Ley de Nacionalidad prevé el certificado de nacionalidad mexicana y declaraciones de renuncia a la protección extranjera para determinados cargos y funciones y, antes de imponer la pérdida efectiva de otra nacionalidad, el Congreso de la Unión está obligado a explicar por qué no basta con

fortalecer ese mecanismo, establecer prohibiciones de conducta durante el cargo y prever responsabilidades únicamente ante incumplimientos concretos.

El diferimiento de las nuevas reglas hasta los procesos electorales correspondientes a 2028 evita modificar de manera inmediata las condiciones aplicables al proceso electoral 2026-2027. Esa previsión transitoria es pertinente para la certeza electoral, pero no corrige las deficiencias sustantivas de la reforma ni sustituye la obligación de justificar la restricción a los derechos políticos.

d. INEFICACIA MATERIAL E INCERTIDUMBRE SOBRE LA RENUNCIA

La nacionalidad es un vínculo jurídico definido por cada Estado y, ante ello, México puede determinar los requisitos para acceder a sus cargos públicos y recibir declaraciones formuladas ante sus autoridades, pero no puede extinguir por sí mismo una nacionalidad atribuida conforme al derecho de otro país.

La pérdida efectiva dependerá de los requisitos, procedimientos, plazos y decisiones previstos en la legislación extranjera.

El "DICTAMEN" no precisa si el requisito se tendrá por cumplido con la manifestación de renuncia ante una autoridad mexicana, con la presentación de la solicitud ante el Estado extranjero, con la aceptación de esa solicitud o hasta que la pérdida produzca efectos definitivos. Tampoco regula qué ocurrirá si el otro Estado no permite la renuncia, exige condiciones adicionales, resuelve después del plazo de registro o atribuye la nacionalidad con independencia de la voluntad de la persona.

Esta indefinición generará condiciones de elegibilidad distintas según la nacionalidad de que se trate. Dos personas mexicanas por nacimiento, situadas en condiciones equivalentes, podrían recibir un trato diferente porque un Estado resuelve la renuncia con rapidez y otro

la condiciona, demora o rechaza. El acceso a un cargo de elección popular en nuestro país no debe depender de la decisión administrativa o de la legislación de una autoridad extranjera.

El régimen transitorio ordena adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, pero la remisión a normas posteriores no subsana la indeterminación de un requisito que se incorpora directamente a la Constitución Política. Los elementos esenciales de la elegibilidad, la forma de acreditación y las consecuencias del incumplimiento deben ser claros desde el texto constitucional para evitar decisiones discrecionales de las autoridades electorales y litigios que afecten la certeza de los procesos.

e. FALTA DE JUSTIFICACIÓN PARA LIMITAR LA RESTRICCIÓN A LAS TITULARIDADES DE LOS PODERES EJECUTIVOS

El "DICTAMEN" propone establecer requisitos adicionales relacionados con la doble nacionalidad exclusivamente para acceder a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no explica por qué la supuesta necesidad de garantizar un vínculo exclusivo de lealtad con el Estado mexicano se limita a las personas titulares de los poderes ejecutivos y no comprende otros cargos públicos con amplias facultades de decisión.

Las Diputadas y Diputados Federales, así como las Senadoras y los Senadores participan directamente, de acuerdo a sus facultades, en la aprobación de reformas constitucionales, leyes, contribuciones, presupuestos y decisiones relacionadas con la seguridad nacional. Asimismo, ejercen facultades de control, fiscalización, ratificación de nombramientos y revisión de los actos de otros poderes, por lo que sus determinaciones también inciden de manera directa en la conducción política, económica e institucional del país.

El Senado de la República, además, analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprueba los tratados internacionales, ratifica determinados nombramientos diplomáticos y autoriza decisiones relacionadas con la presencia y actuación de fuerzas armadas. Por su parte, la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, revisa la Cuenta Pública y ejerce facultades exclusivas que influyen en el destino de los recursos públicos y en el funcionamiento del Estado.

Si el "DICTAMEN" considera que la posesión de otra nacionalidad puede generar, por sí misma, un conflicto de lealtad o comprometer la defensa de los intereses nacionales, tendría que explicar por qué ese riesgo únicamente se actualiza respecto de los poderes ejecutivos y no frente a quienes adoptan decisiones legislativas, presupuestarias, diplomáticas o de seguridad nacional. La ausencia de esa explicación demuestra que la medida no deriva de un análisis objetivo de las atribuciones de cada cargo.

Se advierte que no se plantea extender una restricción injustificada a un mayor número de cargos públicos. Lo que se advierte es la falta de congruencia del "DICTAMEN" al establecer una diferencia entre cargos con amplias facultades de decisión sin acreditar las razones que justificarían ese trato distinto.

Esta omisión confirma que la reforma no parte de un criterio general y funcional, sino de una medida selectiva cuya necesidad, idoneidad y proporcionalidad no han sido demostradas.

f. PROPUESTA DEL GPPAN PARA PROTEGER LAS ELECCIONES Y EL EJERCICIO DEL CARGO

El "DICTAMEN" propone restringir el acceso a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el hecho de poseer otra nacionalidad y dicha condición, por sí sola, no impide el ejercicio del cargo ni acredita una

conducta contraria a los intereses del país. Si el objetivo es proteger las elecciones y asegurar que quien resulte electo pueda desempeñar debida y plenamente su mandato, la restricción debe dirigirse a circunstancias que representen un riesgo real para la continuidad y estabilidad del gobierno.

En lugar de exigir la renuncia a otra nacionalidad, debe impedirse el acceso a esos cargos a quien tenga alguna solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada en su contra por un gobierno extranjero ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, o alguna petición formal de extradición presentada en su contra por un gobierno extranjero ante la propia Secretaría.

La misma restricción debe aplicarse a quien tenga en su contra imputación o acusación formal, auto de procesamiento, orden de aprehensión, orden de detención o determinación procesal equivalente emitida por autoridad extranjera competente, que le atribuya la probable comisión o participación en un delito.

También debe impedirse el acceso al cargo a quien haya sido condenado, mediante sentencia firme dictada por tribunal extranjero competente, por la comisión de un delito doloso y mediante la cual se haya impuesto una pena privativa de la libertad, con independencia de que ésta haya sido cumplida.

Estos supuestos guardan una relación directa con la elección y con la posibilidad real de ejercer el mandato. El permitir que una persona que enfrenta una solicitud de extradición, una orden de detención o una actuación penal formal participe en una elección puede ocasionar que sea detenida, sometida a un procedimiento de extradición o imposibilitada para asumir el cargo después de haber recibido el voto de la ciudadanía. La Constitución Política debe evitar que una elección desemboque en una crisis institucional que podía advertirse desde el registro de la candidatura.

Asimismo, esa protección debe extenderse al ejercicio del cargo y en caso de que se conozca o se actualice las circunstancias antes señaladas, la persona que ejerza el cargo debiera renunciar o separarse del cargo, según corresponda, y aplicarse las reglas constitucionales de sustitución. No sería razonable impedir el registro de una candidatura por esos motivos y, al mismo tiempo, permitir que quien ya ocupa el cargo permanezca en él.

Esta alternativa protege de manera más eficaz la voluntad ciudadana, la legitimidad de las elecciones y la continuidad del gobierno. La doble nacionalidad constituye una condición personal pero los supuestos descritos son actos formales emitidos o promovidos por autoridades extranjeras que pueden afectar materialmente la capacidad de la persona para asumir y ejercer el cargo.

Por ello, el proyecto se solicita que el "DICTAMEN" regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para sustituir la restricción basada en la doble nacionalidad por impedimentos vinculados con solicitudes de extradición, actuaciones penales extranjeras formales y sentencias condenatorias firmes, así como para establecer la renuncia o separación del cargo cuando cualquiera de esos supuestos se presente durante su ejercicio.

IV. CONCLUSIONES

El "DICTAMEN" propone restringir el acceso a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la sola posesión de otra nacionalidad, sin demostrar que esa condición afecte la capacidad, la lealtad o el compromiso de una persona con México. La medida parte de una presunción general y obliga a modificar de manera definitiva el estado jurídico personal para ejercer el derecho a ser votado.

El procedimiento legislativo tampoco permitió una deliberación amplia, informada e incluyente. No se realizaron foros de parlamento abierto con la participación efectiva de personas mexicanas residentes en el exterior, comunidades migrantes y binacionales, especialistas, autoridades electorales y representaciones consulares, pese a que se trata de los sectores directamente afectados por la reforma.

El "DICTAMEN" tampoco explica por qué la exigencia de renunciar a otra nacionalidad se limita a las personas titulares de los poderes ejecutivos. Las Diputadas y Diputados Federales, así como las Senadoras y los Senadores también adoptan decisiones constitucionales, legislativas, presupuestarias, diplomáticas y de seguridad nacional que inciden directamente en la conducción del Estado. Si la doble nacionalidad representara por sí misma un conflicto de lealtad, tendría que justificarse por qué ese supuesto riesgo no se considera respecto de otros cargos con amplias facultades de decisión.

Esta observación no implica proponer que la restricción se extienda a un mayor número de cargos públicos y sólo demuestra que el "DICTAMEN" carece de un criterio general, objetivo y congruente para determinar a qué cargos debe aplicarse la medida y por qué.

El establecer la restricción únicamente en las titularidades de los poderes ejecutivos confirma que la reforma no deriva de un análisis funcional de las atribuciones y responsabilidades de cada cargo.

En caso de que el propósito sea proteger las elecciones y asegurar el adecuado ejercicio del poder público, la Constitución Política debe prever circunstancias que puedan impedir materialmente que una persona asuma o desempeñe el cargo. Entre ellas se encuentran las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las peticiones formales de extradición, las imputaciones, acusaciones, órdenes de aprehensión o detención emitidas

por autoridades extranjeras y las sentencias firmes por delitos dolosos con pena privativa de la libertad.

La aplicación de esos impedimentos antes de la elección evitaría que la ciudadanía vote por una persona que pueda ser detenida, extraditada o imposibilitada para ejercer el mandato. En caso de presentarse esos supuestos debe establecerse la renuncia o separación correspondiente y aplicarse el mecanismo constitucional de sustitución.

La suspensión de la discusión del "DICTAMEN" permitirá corregir el sentido de la reforma, ampliar la deliberación pública y sustituir una restricción basada en la doble nacionalidad por medidas relacionadas directamente con la protección de las elecciones, la gobernabilidad y la continuidad del ejercicio del poder público.

V. PETITORIOS

Por las consideraciones expuestas, las Diputadas y los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, atentamente solicitamos:

Primero. Tenernos por presentada la MOCIÓN SUSPENSIVA en los términos establecidos en el artículo 122, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. Suspender la discusión y votación del "DICTAMEN", debido a que no cuenta con una justificación suficiente sobre la necesidad y proporcionalidad de la restricción propuesta y presenta deficiencias que pueden afectar los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a ser votado y a acceder a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad, al tiempo que omite proteger el proceso electoral frente a solicitudes de extradición, actuaciones penales extranjeras formales y sentencias condenatorias firmes.

Tercero. Turnar el "DICTAMEN" a la Comisión de Puntos Constitucionales para que realice un análisis integral, convoque a un parlamento abierto con la participación de personas mexicanas residentes en el exterior, organizaciones de migrantes, especialistas en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

ATENTAMENTE

Dip. Diego Ángel Rodríguez Barroso
DIPUTADAS Y DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXVI LEGISLATURA

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
CÁMARA DE DIPUTADOS
22 SEP 2026
RECIBIDO
SALÓN DE SESIONES

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
22 SEP 2026 M2
SALÓN DE SESIONES PLENO

MOCIÓN SUSPENSIVA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES.

El **Dip. Rubén Moreira Valdez,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 114, fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente **MOCIÓN SUSPENSIVA,** bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta la siguiente moción suspensiva con el objetivo de interrumpir la discusión del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y locales, **por considerar que una modificación constitucional de esta naturaleza requiere, antes de su aprobación, de un ejercicio amplio de Parlamento Abierto que permita escuchar a las personas mexicanas con doble o múltiple nacionalidad, a las comunidades mexicanas residentes en el exterior y a los sectores especializados vinculados con la materia.**

El dictamen que se pretende aprobar modifica los requisitos constitucionales para acceder a la Presidencia de la República, las gubernaturas de las entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estableciendo que quienes aspiren a dichos cargos no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad y que, en caso de poseerla, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

Dicha reforma incide directamente en el régimen constitucional construido en torno a la doble nacionalidad y en la situación jurídica de mexicanas y mexicanos que, por nacimiento, ascendencia, residencia, migración o cualquier otra circunstancia reconocida por las legislaciones correspondientes, poseen más de una nacionalidad. Precisamente por la trascendencia de la modificación propuesta, resulta necesario que el Congreso de la Unión abra un espacio de participación que permita conocer las opiniones, experiencias y preocupaciones de quienes se encuentran directamente relacionados con esta realidad.

El Parlamento Abierto constituye una herramienta para incorporar la participación ciudadana al trabajo legislativo. La propia Cámara de Diputados ha desarrollado lineamientos bajo los cuales las presidencias de comisiones, comités y órganos de gobierno deben implementar prácticas de Parlamento Abierto, y ha identificado la participación ciudadana como uno de sus componentes.

Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales volvió a privilegiar un proceso legislativo cerrado y apresurado. La iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal fue dictaminada sin abrir un ejercicio de Parlamento Abierto y sin escuchar a las personas directamente involucradas: mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad, organizaciones de migrantes y comunidades mexicanas residentes en el exterior.

Una vez más, la mayoría legislativa pretende llevar al Pleno una reforma constitucional sin abrir previamente las puertas de la Cámara a quienes conocen, viven y serán alcanzados por sus consecuencias. Se reforma el régimen de nacionalidad hablando de las personas mexicanas con doble nacionalidad, pero sin hablar con ellas; se modifican las condiciones para el ejercicio de derechos políticos de quienes poseen otra nacionalidad, pero sin darles voz en el proceso legislativo.

Esta omisión resulta particularmente relevante cuando se observa el antecedente histórico de la reforma constitucional de 1997 en materia de nacionalidad. El propio dictamen recuerda que el 4 de abril de 1995 la Cámara de Diputados creó una **Comisión Especial Plural de Análisis en Materia de Nacionalidad**, encargada de realizar los estudios y consultas necesarios para analizar las modificaciones constitucionales y legales relacionadas con la no pérdida de la nacionalidad mexicana.

Aquella reforma no fue construida exclusivamente al interior del Congreso. Los trabajos comenzaron con un Coloquio sobre la Doble Nacionalidad celebrado en junio de 1995 y posteriormente se desarrolló una amplia consulta nacional organizada por el Congreso, con participación de gobiernos y congresos de entidades seleccionadas por sus altos niveles de migración. El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados dejó constancia de este proceso al discutirse la reforma en diciembre de 1996.

El mismo dictamen que hoy se encuentra a discusión reconoce que durante 1995 y 1996 se realizaron **coloquios, foros y consultas** que permitieron conocer directamente las condiciones de las comunidades mexicanas residentes en el extranjero y las problemáticas que enfrentaban respecto de su nacionalidad.

Existe, por tanto, un precedente legislativo directamente relacionado con la materia que demuestra que, cuando el Estado mexicano modificó sustancialmente su

régimen constitucional de nacionalidad, el Congreso consideró necesario escuchar a las comunidades mexicanas vinculadas con el fenómeno migratorio.

Adicionalmente, es preciso señalar **la falta de información suficiente que permita conocer y valorar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la restricción constitucional propuesta**.

Sobre este punto, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó formalmente a la Comisión de Puntos Constitucionales que, antes de dictaminar, requiriera a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los elementos técnicos y documentales que sustentan la iniciativa. Entre ellos, pidió conocer los casos concretos en los que la doble nacionalidad de una persona titular o aspirante a un Poder Ejecutivo hubiera producido un conflicto efectivo de lealtad institucional o un riesgo para la soberanía nacional; las pruebas que acreditaran dicho daño, amenaza o riesgo; los estudios técnicos, diagnósticos y análisis de seguridad nacional utilizados para justificar la medida; así como el test de proporcionalidad y el análisis de impacto en derechos humanos correspondiente.

Asimismo, solicitó información sobre las alternativas menos restrictivas consideradas, el derecho comparado utilizado como referencia, la viabilidad jurídica de la renuncia a otras nacionalidades y el impacto que la reforma tendría sobre las comunidades mexicanas binacionales y migrantes.

El propósito de dicha solicitud fue que la Comisión contara, antes de adoptar una decisión, con información completa, verificable y pública que permitiera distinguir entre la existencia de un riesgo institucional acreditado y una hipótesis meramente preventiva.

Estos cuestionamientos adquieren especial relevancia porque una reforma constitucional que establece una nueva restricción para el ejercicio de derechos políticos exige una deliberación reforzada. **Antes de votar debe conocerse con claridad cuál es el problema que se pretende resolver, qué evidencia acredita su existencia, por qué las disposiciones actualmente vigentes resultan insuficientes y por qué la medida propuesta resulta necesaria frente a otras alternativas posibles.** La ausencia de estos elementos constituye una razón adicional para no apresurar la discusión del dictamen.

La necesidad de ampliar la deliberación **no constituye únicamente una consideración de quienes suscriben la presente moción**. El 21 de septiembre de 2026, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes presentó ante diversos órganos de esta Cámara un posicionamiento relacionado con la reforma, en el que manifestó su preocupación por la falta de rigor deliberativo del proceso legislativo.

Entre sus señalamientos destaca precisamente que, durante el procedimiento, no se realizó una audiencia pública, una consulta con especialistas ni se convocó a las personas con doble nacionalidad ni a las comunidades migrantes para participar en un debate sobre la reforma. Asimismo, las organizaciones advirtieron inconsistencias entre la exposición de motivos del dictamen y las explicaciones que les fueron proporcionadas respecto de los efectos jurídicos que tendría la renuncia a una segunda nacionalidad.

El pronunciamiento de estas organizaciones confirma precisamente la deficiencia que motiva esta moción suspensiva, **las personas y comunidades directamente relacionadas con la doble nacionalidad están solicitando ser escuchadas antes de que el Congreso adopte una decisión constitucional que incidirá sobre su situación jurídica y sobre el ejercicio de sus derechos políticos.**

Por ello, abrir un ejercicio de Parlamento Abierto no constituye un mecanismo para retrasar indefinidamente la discusión ni presupone cuál debe ser el sentido final de la reforma. Por el contrario, permitiría que la Comisión conozca tanto los argumentos que sustentan la propuesta como las objeciones formuladas por las comunidades migrantes y que cuente con información técnica y jurídica suficiente para adoptar una decisión debidamente deliberada.

Adicionalmente, es necesario precisar que la Suprema Corte ha reconocido, en materias en las que existe un deber específico de consulta, que la participación de las personas directamente involucradas no puede reducirse a una formalidad, sino que debe permitirles intervenir efectivamente en las decisiones legislativas que inciden en sus derechos. Si bien ese estándar obligatorio ha sido desarrollado para supuestos específicos —como personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas—, contiene una premisa democrática que este Congreso no debería ignorar: las personas directamente relacionadas con una decisión legislativa deben contar con espacios efectivos para ser escuchadas.

Esa premisa cobra todavía mayor relevancia en este caso. En 1997, cuando el Congreso construyó el régimen constitucional de doble nacionalidad, abrió espacios de consulta y escuchó a las comunidades mexicanas residentes en el extranjero. Hoy, cuando se pretende modificar los efectos constitucionales de esa misma condición, la Comisión de Puntos Constitucionales pretende avanzar sin escuchar a quienes viven esa realidad.

Por ello, previo a continuar con la discusión y votación del dictamen, resulta pertinente realizar un ejercicio de Parlamento Abierto en el que sean convocadas las **personas mexicanas con doble nacionalidad; organizaciones de migrantes y comunidades mexicanas residentes en el exterior; especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, derecho electoral, derecho internacional y derecho migratorio; instituciones académicas y centros de investigación; organismos públicos de derechos humanos; autoridades electorales;**

especialistas en seguridad nacional, soberanía y relaciones internacionales; así como las demás personas, instituciones y organizaciones cuya participación resulte relevante para el análisis de la reforma.

Un ejercicio de esta naturaleza permitiría que el Congreso conozca de manera directa las distintas implicaciones de la modificación constitucional propuesta y que las personas mexicanas cuya condición de doble o múltiple nacionalidad se encuentra en el centro de la discusión tengan oportunidad de expresar su posición antes de que se adopte una decisión.

Por todo lo anterior, se considera necesario **interrumpir la discusión del presente dictamen y devolverlo a la Comisión de Puntos Constitucionales**, a efecto de que, previo a continuar con su trámite legislativo, se realice un ejercicio de Parlamento Abierto en los términos señalados y, una vez concluido éste, la Comisión cuente con mayores elementos para continuar con el análisis y dictaminación de la reforma.

MOCIÓN SUSPENSIVA

ÚNICO. - SE SUSPENDA LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LA TITULARIDAD DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y LOCALES**, A FIN DE REALIZAR UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO PARA ESCUCHAR A LAS PERSONAS MEXICANAS CON DOBLE NACIONALIDAD, A LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES Y A LAS COMUNIDADES MEXICANAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2026

Diputado Ruben Moreira Valdez

ATENTAMENTE

Diputado Humberto Amber Delgadillo

«De la diputada Beatriz Milland Pérez, de Morena, posicionamiento relativo al dictamen.

Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros legisladores:

La reforma que hoy discutimos parte de una premisa sencilla, pero de enorme trascendencia para nuestra vida pública: quien recibe del pueblo mexicano la responsabilidad de conducir los destinos de la nación debe tener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.

La iniciativa presentada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum propone establecer que, para ejercer la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se requiera contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Para ello, quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro y, durante el ejercicio del cargo, no podrá adquirir o solicitar otra, utilizar documentos de identidad extranjera, ejercer derechos políticos en otro Estado o acogerse a su protección diplomática.

Quiero ser muy clara: esta reforma no cuestiona a las mexicanas y mexicanos que tienen doble nacionalidad. Millones de compatriotas viven fuera de nuestro territorio, forman familias, trabajan y construyen su vida en otros países, sin que ello disminuya sus raíces ni su pertenencia a México.

Lo que aquí se regula es algo diferente: las condiciones para ejercer la máxima responsabilidad política de nuestro país y de nuestras entidades federativas.

Porque gobernar implica tomar decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas: decisiones sobre nuestra economía, nuestros recursos, nuestra seguridad y nuestro desarrollo. Por eso, quien recibe ese mandato debe tener como única referencia nacional el interés de México y como destinatario de su responsabilidad al pueblo mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo explicó con claridad: "solo le juras al pueblo de México", y ha señalado que quien pretenda ejercer la Presidencia o una gubernatura debe renunciar a otra nacionalidad para asumir plenamente esa responsabilidad.

Ese es el sentido de esta reforma.

No se trata de levantar barreras frente al mundo ni de desconocer la riqueza de una sociedad cada vez más vinculada internacionalmente. Se trata de establecer una regla para quienes ocupan los cargos desde los cuales se toman las decisiones fundamentales del Estado mexicano.

Nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Y si el poder proviene del pueblo, entonces quienes lo ejercen deben responder ante él con absoluta claridad.

Desde Morena entendemos que transformar la vida pública también significa fortalecer nuestras instituciones y poner en el centro a quienes durante mucho tiempo fueron excluidos de las grandes decisiones: las familias mexicanas, nuestras comunidades y nuestro pueblo.

México puede cooperar con otras naciones, mantener relaciones comerciales, recibir inversiones y construir acuerdos internacionales sin comprometer sus propios intereses. Como ha señalado nuestra presidenta: "colaboramos, pero no nos subordinamos".

Y precisamente por eso esta reforma es importante.

Porque cuando hablamos de quién puede conducir los destinos de México, debemos garantizar que esa responsabilidad se ejerza sin vínculos jurídicos con otro Estado que puedan generar un conflicto frente a los intereses de nuestra nación.

Desde Tabasco, donde conocemos el valor de nuestra tierra, de nuestros recursos y del trabajo de nuestra gente, respaldamos esta propuesta porque entendemos que defender a México significa, antes que nada, defender a su pueblo y garantizar que sus decisiones permanezcan en manos de quienes tienen el mandato de servirle.

Compañeras y compañeros:

El pueblo mexicano deposita su confianza en quienes elige. Esa confianza no puede estar dividida.

Quien aspirar a gobernar México debe saber que su responsabilidad es con México; que su mandato proviene de las mexicanas y los mexicanos, y que sus decisiones deben responder siempre al interés nacional.

Por ello, manifiesto mi respaldo a esta reforma constitucional.

Porque México debe tener gobiernos que respondan al pueblo mexicano, con plena responsabilidad y sin ninguna otra lealtad jurídica que comprometa ese mandato.

Es cuanto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.— Diputada Beatriz Milland Pérez (rúbrica).»

«De la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del PRI, posicionamiento relativo al dictamen.

Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen que hoy se somete a consideración propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de nuestra Constitución para establecer nuevas condiciones a quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta exige no tener otra nacionalidad o que renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, además de impedir que durante el ejercicio del cargo puedan adquirir otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro país, ejercer derechos políticos ante éste o acogerse a su protección diplomática.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que una reforma constitucional requiere una justificación particularmente sólida, porque contar con otra nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en alguien menos comprometido con México ni constituye por sí mismo un conflicto de interés, por lo que una restricción de esta importancia debe sustentarse en hechos y no en suposiciones.

Detrás de la doble nacionalidad existen historias familiares, laborales y migratorias de millones de mexicanas y mexicanos que mantienen plenamente su identidad y sus vínculos con nuestro país, por ello resulta preocupante que esta condición pueda convertirse en una causa para restringir el acceso a determinados derechos políticos.

Hay que recordar que nuestra Constitución ya protege los intereses del país, pues el artículo 32 establece que determinados cargos públicos sólo pueden ser ocupados por mexicanos de nacimiento, que no tengan otra nacionalidad.

Por ello, el dictamen tendría que explicar con claridad cuál es el vacío jurídico que pretende resolver, por qué las disposiciones vigentes resultan insuficientes y de qué manera esta nueva restricción resulta necesaria y proporcional, sobre todo porque estamos hablando de limitar los derechos políticos que ya están reconocidos por nuestra Constitución.

También genera preocupación que desde el origen de esta reforma se hayan realizado referencias a personas determinadas, porque la Constitución debe establecer reglas generales, impersonales y permanentes, alejadas de coyunturas electorales, disputas políticas o circunstancias particulares, pues sus disposiciones no deben crearse para beneficiar o perjudicar a una persona en particular.

A ello se suma la forma en que se conduce el trabajo legislativo cuando una iniciativa proviene del Ejecutivo federal, ya que mientras numerosas propuestas de los distintos grupos parlamentarios permanecen pendientes durante meses y las reformas impulsadas desde el gobierno reciben un tratamiento prioritario y acelerado.

Esta Cámara debe ejercer plenamente su responsabilidad como Poder Legislativo, deliberar, discutir, modificar cuando sea necesario y actuar como un verdadero contrapeso, porque nuestra función constitucional exige analizar cada reforma por sus méritos, sus necesidades y sus consecuencias sin convertir el trabajo legislativo.

Incluso los artículos transitorios generan dudas respecto de la urgencia de la medida, ya que establecen que estas disposiciones comenzarán a aplicarse hasta el proceso electoral de 2028 y quienes actualmente ocupan los cargos señalados quedarán fuera de su aplicación, lo que dificulta sostener que exista un riesgo inmediato que justifique esta modificación constitucional.

México necesita reglas que garanticen a los que ejerzan responsabilidades públicas actúen con legalidad, independencia y lealtad al país, pero esas cualidades deben acreditarse mediante la conducta y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

La necesidad de esta nueva restricción no ha sido suficientemente demostrada, la Constitución no debe responder a coyunturas políticas particulares, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra del presente dictamen.

Muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.— Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica).»

«De la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, posicionamiento relativo al dictamen.

La iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión estigmatiza (y al estigmatizar, criminaliza) a quienes poseen, en acto o en potencia, una doble nacionalidad.

Se trata de un claro caso de derecho penal del autor y no del acto, que ahora procuraremos explicar.

Cuando tipificamos como sancionable la condición de una persona y no sus conductas, violentamos uno de los principios más importantes del derecho penal garantista.

Se delinque –diputadas y diputados–, a través de actos u omisiones, no de condiciones humanas ni de situaciones que escapan a la voluntad de los individuos.

Cualquier disposición diversa hace del sujeto de derechos un enemigo al que hay que anular (en el caso electoral descalificarlo de la contienda).

Ustedes le hacen caso a la titular del Poder Ejecutivo que quiere castigar a quienes busquen una candidatura a la Presidencia de la República, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o a una gubernatura estatal (ya podríamos hablar de semejante e indebida intervención en la autonomía local) cuando tengan o adquieran una nacionalidad adicional y distinta a la mexicana y no renuncien a ella antes de solicitar el registro de su candidatura "en los términos que establezca la ley".

Más allá de que ya no estamos dentro de los plazos que el artículo 105 constitucional prevé como necesarios para la validez de reformas legales en materia electoral (90 días antes de que inicien los procesos comiciales), la propuesta sufre de otras graves carencias de técnica ya no digamos legislativa, sino plenamente jurídica.

Confunden todo, confunde lo que es un hecho jurídico que escapa a la voluntad de los individuos (la atribución de nacionalidades por el nacimiento o por el origen de los padres) con un acto voluntario como es el que adquirir una nacionalidad diversa a la mexicana promoviendo, por ejemplo, una naturalización.

Confunde la nacionalidad con la ciudadanía, y los derechos con prerrogativas.

Y peor aún, confunde soberanía con exclusión y discriminación.

Miren de lo que han sido capaces; son capaces de entregar el territorio al crimen organizado pero incapaces de darle todos sus derechos a los migrantes, a las y los mexicanos.

Suponen la inocencia de quienes sobran pruebas de su culpabilidad en la tragedia de Sinaloa, pero presuponen la traición en quienes fueron orillados a pedir otra nacionalidad.

Pero, lo que busca la iniciativa presidencial no es eso sino estigmatizar a quienes poseen una nacionalidad doble y presumir su falta de lealtad hacia la patria e incluso su tendencia a la traición. Al utilizar el verbo "tener", la propuesta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales emplea una táctica punitiva propia de estados autoritarios: descalifica a la persona por sus cualidades y no por sus actos voluntarios y libres.

La propuesta luce mucho más peligrosa cuando se repara en sus alcances punitivos, porque castiga.

Imaginemos que alguien tiene derecho a una nacionalidad alterna a la mexicana que no sea renunciable, como lo son la mayoría de las nacionalidades en los Estados de derecho. Por más que quiera, su acto de renuncia no tendría validez ante el segundo Estado (es más: es probable que ni siquiera le admitan el escrito de renuncia).

¿Saben que hay nacionalidades irrenunciables? Puede, desde luego, simular una renuncia ante el Instituto Nacional Electoral, pero el acto carecerá de consecuencias en el plano internacional y mantendrá sobre su cabeza una espada de Damocles acerca de la cual pocos han reflexionado: la de las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales del Título Cuarto de la Constitución.

En efecto, cuando la iniciativa plantea que quienes ejerzan los cargos no podrán invocar una nacional extranjera utilizando "entre otros supuestos" (tipo penal abierto e indeterminado, como podrá observarse) un pasaporte o documento de identidad expedido por el segundo país, o ejerciendo los derechos políticos y ciudadanos ante éste, o acogiéndose a la protección diplomática que su segunda Patria pueda llegar a ofrecerle, cierra las puertas al ejercicio de derechos y castiga a quien, por situaciones que pueden provenir de hechos y no de actos jurídicos voluntarios, busca ejercer un derecho que lo libre, por ejemplo, de una persecución política de esas que tanto le gustan al régimen.

En un país como el nuestro, tan estrechamente ligado a los fenómenos migratorios, ya parecía un exceso obligar a quien busque presidirlo haber residido en el país "al menos durante veinte años" (artículo 82 constitucional).

¿De cuántas mexicanas y mexicanos patriotas y expertas en generar y administrar riquezas en condiciones de adversidad nos hemos privado merced a semejantes disposiciones? Es imposible saberlo.

Ahora vamos a peor, vamos a quitar los incentivos para participar en la política y todo por berrinches, caprichos y cálculos.

Vamos a desincentivar la participación política de quienes a buen seguro preferirán ahorrarse un problema mayúsculo que se deriva de situación que, como la migración de sus ancestros por cuestiones políticas, económicas o laborales, exceden a su voluntad.

Que el origen familiar, el país en el que se nació o el ejercicio de un derecho pueda ser causal de juicio político o de reproche penal o de descalificación para participar en políticas es mala noticia para todos, no sólo para quienes poseen una doble nacionalidad.

Que se estigmatice y se presuma la culpabilidad de personas que literalmente no han hecho nada, subvierte los cimientos de nuestro Estado constitucional.

Es lo malo del pánico electoral y de las encuestas que lo generan.

Hay quien piensa que, cuando los números no dan, lo mejor es montar un numerito. Un numerito contrario a la República y a los derechos fundamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.— Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

«Del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Morena, posicionamiento relativo al dictamen.

Ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores:

La iniciativa que hoy nos convoca aborda un asunto que toca directamente la soberanía del Estado mexicano y la naturaleza de las responsabilidades que corresponden a quienes encabezan los poderes ejecutivos de nuestro país.

El complejo momento geopolítico que vivimos nos obliga a tomar decisiones de Estado encaminadas a preservar y proteger nuestra capacidad como país para tomar nuestras propias decisiones y ser independientes frente a otros Estados.

Esto nos lleva, ineludiblemente, al perfeccionamiento de las reglas que rigen nuestros procesos electorales.

Por tanto, coincido con la iniciativa de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que busca reformar los artículos 82, 116 y 122 de nuestra Constitución, para establecer la nacionalidad mexicana como única para quienes aspiren o ejerzan el cargo de la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta medida es congruente con los principios que rigen nuestro movimiento como la primacía de la soberanía, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia.

1. No se discute la identidad

Antes de seguir, considero necesario hacer una valiosa aclaración. La iniciativa presidencial que se discute en esta Cámara no cuestiona la cultura binacional ni los vínculos personales, familiares o culturales que millones de mexicanos mantienen con otros países.

Nuestro movimiento cree firmemente que los mexicanos, como sucede a partir de 1997, tienen el derecho irrenunciable a la doble nacionalidad.

Ello es, en buena medida, un reconocimiento al importantísimo impacto que la diáspora mexicana, una de las más numerosas, posee alrededor del mundo.

Esta iniciativa, pues, no busca descocer la doble nacionalidad, ni limitar los derechos políticos de las personas mexicanas que cuenten con ella, ni tampoco hacer que renuncien a otras nacionalidades.

Tampoco parte de una presunción de menor patriotismo, de falta de compromiso o de deslealtad de quienes poseen más de una nacionalidad. Por el contrario, reafirmamos que este tipo de lazos con otras naciones contribuyen enormemente a difundir y preservar la cultura nacional.

Dicho de otro modo, no se busca alterar la vida de quienes poseen una doble o múltiple nacionalidad más allá de la mexicana, y tampoco se pretende desconocer los derechos que otros Estados otorguen a los mexicanos en esta condición.

La iniciativa se dirige, reitero, exclusivamente para aquellos que busquen llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

2. Soberanía y lealtad constitucional

Para ser más específicos, la iniciativa busca precisar que las personas que pretendan contender o ejercer estos cargos públicos no deben tener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana y, en caso de tenerla, renuncien a ella en los términos que establezca la ley.

Esta disposición no es excesiva. A nivel convencional, existe un amplio consenso para determinar que la nacionalidad es una condición admisible para regular el ejercicio de los derechos políticos.

La medida propuesta es razonable, proporcional y compatible con el principio de igualdad.

Jurídicamente, el debate radica en las implicaciones de los vínculos jurídico-políticos con Estados distintos.

Esto a causa de que tener una nacionalidad significa pertenecer jurídicamente a una comunidad política, misma que genera derechos y obligaciones con el Estado correspondiente.

Nuestro propio marco constitucional y jurídico, así como diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han mostrado que sí son justificables ciertas restricciones, concernientes a la nacionalidad, para desempeñar cargos públicos.

Dichas disposiciones no son generalizadas, sino que sólo son aplicables cuando la naturaleza del cargo lo requiere, como es el caso de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Así, se robustece la lealtad a la Constitución Política de México, a sus leyes y al interés exclusivo del pueblo de México y se erradica una posible motivación a responder a los intereses jurídicos-políticos de otros Estados.

3. Naturaleza especial del cargo

La delimitación de la nacionalidad única es una propuesta razonada. Su fundamento es la naturaleza del cargo del Ejecutivo federal y locales y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

En otras palabras, estos cargos implican una conducción política y administrativa estratégica que, nuevamente, acreditan la necesidad de esta reforma.

Tengamos presente que la Presidencia de la República, como cargo unipersonal, conduce la política exterior, participa en la celebración de tratados, es responsable de preservar la seguridad nacional y posee atribuciones exclusivas con las Fuerzas Armadas. Es decir, son funciones que comprometen directamente la representación del Estado mexicano y su relación con otros Estados.

Por eso, establecer un vínculo jurídico-político exclusivo con México no constituye una declaración sobre la identidad de una persona. Es una garantía orientada a evitar la concurrencia formal de vínculos jurídicos con otros Estados en el ejercicio de funciones especialmente sensibles.

Mientras que las y los gobernadores y la jefa o jefe de Gobierno de Ciudad de México también representan cargos unipersonales, y aunque no ejercen atribuciones en materia de política exterior o defensa nacional, sí concentran importantes responsabilidades políticas, administrativas y en seguridad pública.

En este sentido, la iniciativa es constitucionalmente legítima, necesaria y proporcional. Privilegia la preservación y defensa de nuestra soberanía y pondera el interés del pueblo de México por encima de intereses personales y extranjeros.

4. Elemento diferenciador

Por ello es válido e indispensable reforzar las disposiciones vigentes. Si bien actualmente a la Ley de Nacionalidad y su Reglamento contemplan un procedimiento para obtener un certificado de nacionalidad mexicana, ello es insuficiente.

La reforma presidencial, en consecuencia, tiene como virtud que las personas que busquen ejercer el cargo de la Presidencia de la República, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, acrediten que el Estado extranjero reconoce la pérdida de su nacionalidad.

Este cambio no sólo brindará mayor transparencia y certeza en los procesos electorales, sino que será una garantía plena de la nacionalidad mexicana única.

Ello implicará que las políticas y decisiones públicas que, en su caso, se asuman durante el cargo, no obedezcan a intereses de otros Estados sino al interés nacional.

5. Conclusiones

Esta reforma no elimina ni restringe derechos políticos de forma indiscriminada.

Tampoco es una reforma coyuntural ni tiene un destinatario particular, es una medida institucional que salvaguarda al Estado mexicano en un contexto internacional donde el injerencismo se ha hecho cada vez más presente.

Así, no estamos legislando contra las personas mexicanas con doble o múltiple nacionalidad, estamos legislando sobre la naturaleza de determinadas responsabilidades públicas, con el objetivo de preservar la lealtad constitucional en cargos públicos que resultan claves para la supervivencia y soberanía de la República.

Si bien, establece condiciones para la competencia electoral y el ejercicio de la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, ello es constitucional y convencionalmente justificable.

Nuestro movimiento busca que quien conduzca la política exterior, desempeñe la representación internacional de nuestro país, la relación con las fuerzas armadas y tenga a cargo la seguridad nacional sea sólo leal a nuestro país, nuestra Constitución y nuestras leyes.

La independencia de nuestro país es un valor y principio que el pueblo de México ha cuidado y defendido vigorosamente a lo largo de más de dos siglos.

En la época actual, esta responsabilidad conlleva a que la soberanía también se defienda desde las instituciones y a través de reglas democráticas.

Ello obligará a que las candidatas y candidatos y, en su caso, quienes desempeñen la Presidencia de la República, gubernatura y Jefatura de Gobierno de Ciudad de México tengan un compromiso absoluto y exclusivo con nuestra nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»



Secretario de Servicios Parlamentarios: Hugo Christian Rosas de Léon; **Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria:** Gilberto Becerril Olivares; **Directora del Diario de los Debates:** Eugenia García Gómez; **Jefe del Departamento de Producción del Diario de los Debates:** Oscar Orozco López. Apoyo Documental: **Dirección General de Proceso Legislativo,** José de Jesús Vargas, director. Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión 66, edificio E, cuarto nivel, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969. Teléfonos: 5036-0000, extensiones 54039 y 54044. **Página electrónica:** http://cronica.diputados.gob.mx